

No. 54612*

**Argentina
and
Chile**

Agreement between the Argentine Republic and the Republic of Chile for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion and avoidance (with Protocol). Santiago, Chile, 15 May 2015

Entry into force: *11 October 2016 by notification, in accordance with article 31*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 14 August 2017*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Argentina
et
Chili**

Accord entre la République argentine et la République du Chili tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales (avec protocole). Santiago (Chili), 15 mai 2015

Entrée en vigueur : *11 octobre 2016 par notification, conformément à l'article 31*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Argentine,
14 août 2017*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO
ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y
LA REPÚBLICA DE CHILE
PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN A LOS
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PARA
PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL**

La República Argentina y la República de Chile,

Deseosos de promover el desarrollo de su relación económica y fortalecer su cooperación en materia tributaria,

Con la intención de concluir un Convenio para la eliminación de la doble imposición en relación a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio sin crear oportunidades para situaciones de nula o reducida tributación a través de evasión o elusión fiscal (incluyendo aquellos acuerdos para el uso abusivo de tratados *–treaty-shopping–* dirigidos a que residentes de terceros Estados obtengan indirectamente beneficios de este Convenio),

Han acordado lo siguiente:

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

ARTÍCULO 1

PERSONAS COMPRENDIDAS

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

ARTÍCULO 2

IMPUESTOS COMPRENDIDOS

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada Estado Contratante, cualquiera fuera el sistema de exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los impuestos que gravan la renta total, o el patrimonio total, o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias provenientes de la enajenación de bienes muebles e inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.

3. Los impuestos actuales a los cuales se aplica este Convenio son, en particular:

(a) en el caso de Argentina:

(i) impuesto a las ganancias;

(ii) impuesto sobre los bienes personales; e

(iii) impuesto sobre la ganancia mínima presunta;

(en adelante denominados "impuesto argentino")

(b) en el caso de Chile:

los impuestos establecidos en la "Ley sobre Impuesto a la Renta" (en adelante denominados "impuesto chileno").

4. El Convenio se aplicará asimismo a los impuestos idénticos o sustancialmente similares que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones importantes que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

DEFINICIONES

ARTÍCULO 3

DEFINICIONES GENERALES

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

(a) las expresiones "un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante" significan, según lo requiera el contexto, la República de Chile o la República Argentina; en adelante Chile o Argentina, respectivamente;

- (b) el término "persona" comprende a las personas físicas, a las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
- (c) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que sea tratada como persona jurídica a los efectos impositivos;
- (d) las expresiones "empresa de un Estado Contratante" y "empresa del otro Estado Contratante" significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;
- (e) la expresión "tráfico internacional" significa todo transporte efectuado por un buque, aeronave o vehículo de transporte terrestre explotado por una empresa de un Estado Contratante, excepto cuando el transporte se realice exclusivamente entre dos puntos situados en el otro Estado Contratante;
- (f) el término "nacional" significa:
 - (i) cualquier persona física que posea la nacionalidad de un Estado Contratante;
 - (ii) cualquier persona jurídica, o asociación constituida conforme a la legislación vigente de un Estado Contratante.
- (g) la expresión "autoridad competente" significa:
 - (i) en el caso de Argentina, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Secretaría de Hacienda) o sus representantes autorizados.
 - (ii) en el caso de Chile, el Ministro de Hacienda, el Director del Servicio de Impuestos Internos o sus representantes autorizados.

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante, en cualquier momento, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que, en ese momento, le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación impositiva sobre el que resultaría de otras ramas del derecho de ese Estado.

ARTÍCULO 4

RESIDENTE

1. A los efectos del presente Convenio, el término "residente de un Estado Contratante" significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, está sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Este término no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en él.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

- (a) dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde posea una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
- (b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde viva habitualmente;
- (c) si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;
- (d) si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso mediante el procedimiento de acuerdo mutuo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona, que no sea persona física, sea residente de ambos Estados Contratantes, será considerada residente sólo del Estado de la que sea nacional. Si fuere nacional de ambos Estados Contratantes, los Estados Contratantes harán lo posible, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, por resolver el caso. En ausencia de acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes, dicha persona no tendrá derecho a ninguno de los beneficios o exenciones impositivas contempladas por este Convenio.

ARTÍCULO 5

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión "establecimiento permanente" significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.
2. La expresión "establecimiento permanente" comprende, en especial:
 - (a) una sede de dirección;
 - (b) una sucursal;
 - (c) una oficina;
 - (d) una fábrica;
 - (e) un taller;
 - (f) una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar relacionado con la exploración, extracción o explotación de recursos naturales.
3. La expresión "establecimiento permanente" asimismo comprende:
 - (a) una obra, una construcción, un proyecto de montaje o de instalación o actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dichas obras, proyectos o actividades continúen durante un período superior a seis meses;
 - (b) la prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, por intermedio de empleados u otras personas físicas encomendados por la empresa para ese fin en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses;
 - (c) la operación de un equipo grande o valioso en un Estado Contratante por un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses.

La duración de las actividades a que se refiere este apartado, se determinará agregando los períodos durante los cuales se desarrollan actividades en un Estado Contratante por empresas asociadas, siempre que las actividades de la empresa en ese Estado estén conectadas o sean substancialmente las mismas que las actividades desarrolladas en ese Estado por su asociada. En todo caso, el período durante el cual dos o más empresas

asociadas desarrollan actividades concurrentes será contado sólo una vez. Una empresa se considerará asociada con otra empresa si una de ellas participa directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de la otra, o la misma persona o personas participan directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de ambas empresas.

4. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, se considera que la expresión "establecimiento permanente" no incluye:

- (a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
- (b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas o exponerlas;
- (c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
- (d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de recoger información para la empresa;
- (e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, suministrar información o realizar investigaciones científicas para la empresa;

en la medida en que tales actividades tengan un carácter preparatorio o auxiliar.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, y sujeto a lo dispuesto en el apartado 6, cuando una persona actúe en un Estado Contratante por cuenta de una empresa y de esa manera habitualmente concluya contratos, negocie los elementos esenciales de contratos, o interactúe con personas específicas de forma tal que esa interacción resulte en la celebración de contratos, que en virtud del vínculo jurídico entre esa persona y la empresa, sean contratos por cuenta y riesgo de la empresa, se considerará que dicha empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado Contratante con relación a cualquier actividad que esa persona realice para la empresa a menos que las actividades de esta persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no se hubiera considerado ese lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.

6. El apartado 5 no se aplicará cuando la persona que actúa en un Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro Estado Contratante realice su negocio en el primer Estado mencionado como un agente independiente actuando por cuenta de varias personas y actúa para la empresa dentro del

marco ordinario de ese negocio. Sin embargo, cuando una persona actúa de manera exclusiva o casi exclusiva por cuenta de una empresa o de empresas asociadas, esa persona no será considerada como un agente independiente al que se refiere este apartado respecto de tal empresa o empresas.

7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera) no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en un establecimiento permanente de la otra.

IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS

ARTÍCULO 6

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agropecuarias o forestales) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Para los efectos de este Convenio, la expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le atribuya la legislación del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende, asimismo, los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agropecuarias y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposiciones del derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos variables o fijos por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques, embarcaciones y aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican a las rentas derivadas de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales independientes.

ARTÍCULO 7

BENEFICIOS EMPRESARIALES

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean atribuibles a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán al establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos necesarios realizados para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte.

4. No obstante las disposiciones del apartado 1, los beneficios obtenidos por una empresa de un Estado Contratante provenientes del desarrollo de la actividad aseguradora o reaseguradora que cubran bienes situados en el otro Estado Contratante o a personas que son residentes de ese otro Estado al momento de celebrarse el contrato de seguro o reaseguro, pueden someterse a imposición en ese otro Estado, ya sea que la empresa desarrolle o no su actividad en ese otro Estado por medio de un establecimiento permanente allí situado. Sin embargo, en ese caso (en ausencia de un establecimiento permanente), el impuesto aplicado no podrá exceder del:

- (a) 2,5 por ciento del monto bruto de la prima en el caso de pólizas de reaseguros y,
- (b) 10 por ciento del monto bruto de las primas en el caso de todas las demás pólizas de seguro.

5. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar las utilidades imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de las utilidades totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el apartado 2 no impedirá que ese Estado Contratante determine de esta manera las utilidades imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de

ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este Artículo.

6. A los efectos de los apartados anteriores, los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.

7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros Artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente Artículo.

ARTÍCULO 8

TRANSPORTE INTERNACIONAL

1. Los beneficios obtenidos por una empresa de un Estado Contratante procedentes de la explotación de buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre en el tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

2. Para los fines de este Artículo, los beneficios procedentes de la explotación de buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre en el tráfico internacional comprenden:

- (a) los ingresos brutos que se deriven directamente de la explotación de buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre en el tráfico internacional;
- (b) los beneficios procedentes del alquiler o arrendamiento de vehículos de transporte terrestre, buques o aeronaves a casco desnudo;
- (c) los beneficios procedentes del uso o alquiler de contenedores (incluidos los remolques y equipos vinculados para el transporte de contenedores) usados para el transporte de bienes o mercancías; y
- (d) los intereses sobre cantidades generadas directamente de la explotación de buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre en el tráfico internacional;

siempre que dicho alquiler, dicho uso o los intereses, según se trate del inciso b), del inciso c) o del inciso d), sean accesorios a la explotación de buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre en el tráfico internacional.

3. Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a las utilidades procedentes de la participación en un "pool", en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional.

ARTÍCULO 9

EMPRESAS ASOCIADAS

1. Cuando:

- (a) una empresa de un Estado Contratante participe, directa o indirectamente, en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o
- (b) unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante,

y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, las utilidades que habrían sido obtenidas por una de las empresas de no existir dichas condiciones, pero que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en las utilidades de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado -y someta, en consecuencia, a imposición- los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán debidamente en cuenta las demás disposiciones del Convenio y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán mutuamente, si fuese necesario.

3. Las disposiciones del apartado 2 no se aplican en el caso de fraude, negligencia u omisión culposa.

ARTÍCULO 10

DIVIDENDOS

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:

- (a) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos, si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directamente al menos el 25 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
- (b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.

Este apartado no afecta la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se pagan los dividendos.

3. El término "dividendos" en el sentido de este Artículo significa los rendimientos de las acciones, u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como los rendimientos de otras participaciones o derechos sociales sujetas al mismo tratamiento fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado del cual sea residente la sociedad que efectúe la distribución.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro Estado unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos sean pagados a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situados en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un

impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.

ARTÍCULO 11

INTERESES

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y según la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:

- (a) 4 por ciento del importe bruto de los intereses derivados de la venta a crédito efectuada al comprador de la maquinaria y equipo por el beneficiario efectivo que es el vendedor de la maquinaria y equipo;
- (b) 12 por ciento del importe bruto de los intereses derivados de:
 - (i) préstamos otorgados por bancos y compañías de seguros;
 - (ii) bonos y valores que son regular y sustancialmente transados en una bolsa de valores reconocida;
- (c) 15 por ciento del importe bruto de los intereses en todos los demás casos.

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma de aplicación de esos límites.

3. El término "intereses" en el sentido de este Artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, y en particular los rendimientos de títulos públicos y los rendimientos de bonos y obligaciones, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas en préstamo. El término "intereses" no incluye las rentas comprendidas en el Artículo 10.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no serán aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí,

o presta servicios personales independientes en ese otro Estado por medio de una base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.

5. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y éstos son soportados por el establecimiento permanente o la base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.

6. Cuando en virtud de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, el excedente podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

7. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el objetivo principal o uno de los objetivos de cualquier persona relacionada con la concesión o asignación del derecho de crédito con respecto del cual el interés es pagado, es el de obtener ventajas del presente Artículo por medio de la mencionada concesión o asignación.

ARTÍCULO 12

REGALÍAS

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalías también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y conforme a la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante el impuesto así exigido no podrá exceder del:

- (a) 3 por ciento del importe bruto pagado por el uso o el derecho al uso de noticias;

- (b) 10 por ciento del importe bruto pagado por el uso o el derecho al uso de un derecho de autor sobre cualquier obra literaria, artística o científica (no están incluidas las regalías con respecto a películas cinematográficas, obras de cine, cintas u otros medios de reproducción en relación con emisiones de televisión), por el uso o el derecho al uso, de una patente, marca de fábrica o de comercio, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, o por el uso, o el derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, así como por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas y pagos por asistencia técnica;
- (c) 15 por ciento del importe bruto de las regalías en todos los demás casos.

3. El término "regalías" empleado en este Artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de noticias, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas (incluidos programas computacionales), de películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y sonido, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad intangible, o por el uso o derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, así como por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas y pagos por asistencia técnica.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante del que procedan las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente allí situado, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes a través de una base fija situada allí, y el derecho o bien por el que se pagan las regalías están vinculados efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.

5. Las regalías se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando la persona que paga sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en uno de los Estados Contratantes un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la obligación del pago de las regalías, y dicho establecimiento permanente o base fija soporte la carga de los mismos, tales regalías se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.

6. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor

y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

ARTÍCULO 13

GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este último Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa de la que forme parte) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre explotados en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde resida el enajenante.
4. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de acciones o de otros derechos de participación cuyo valor derive directa o indirectamente, en cualquier momento durante los 365 días precedentes a la enajenación, en más de un 50 por ciento de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
5. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de acciones u otros derechos de participación, distintas de las mencionadas en el apartado 4, que representen directa o indirectamente una participación en el capital de una sociedad residente en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición por ese otro Estado, si el residente mencionado en primer lugar ha poseído en cualquier momento durante los 365 días precedentes a la enajenación, directa o indirectamente, al menos un 20% de las acciones u otros derechos en el capital de esa sociedad. Sin embargo, si dicha participación en el capital de la sociedad es inferior al 20 por ciento, el impuesto así exigido no podrá exceder del 16 por ciento de la ganancia.

6. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados anteriores sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida el enajenante.

ARTÍCULO 14

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

1. Las rentas obtenidas por una persona física residente de un Estado Contratante con respecto a servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, excepto en las siguientes circunstancias en las que dichas rentas también pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante:

- (a) si dispone de manera habitual de una base fija en el otro Estado Contratante a efectos de llevar a cabo sus actividades; en tal caso dichas rentas podrán someterse a imposición en ese otro Estado, sólo en la medida en que puedan atribuirse a la citada base fija; o
- (b) si su permanencia en el otro Estado Contratante se extiende por un período o periodos que en total alcancen o excedan de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año calendario respectivo; en tal caso, sólo las rentas obtenidas por el desarrollo de sus actividades en ese otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. El término "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores.

ARTÍCULO 15

SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES

1. Sujeto a las disposiciones de los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidos por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se realice en el otro Estado Contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo realizado en el otro Estado Contratante, sólo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer término si:

- (a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año calendario respectivo; y
- (b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, una persona que no es residente del otro Estado; y
- (c) las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente o una base fija que la persona tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante respecto de un empleo ejercido a bordo de un buque, aeronave o vehículo de transporte terrestre operados en tráfico internacional por una empresa de un Estado Contratante, sólo serán gravables en ese Estado. Sin embargo, cuando esa remuneración es obtenida por un residente del otro Estado Contratante, puede también ser gravada en ese otro Estado.

ARTÍCULO 16

HONORARIOS DE DIRECTORES

Los honorarios de directores y otros pagos similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en su carácter de miembro del directorio o de un órgano similar de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

ARTÍCULO 17

ARTISTAS Y DEPORTISTAS

1. No obstante las disposiciones de los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado Contratante en calidad de artista, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Cuando las rentas derivadas de las actividades ejercidas por un artista o un deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o deportista, sino a otra persona, dichas rentas pueden, no obstante las disposiciones de los Artículos 7, 14 y 15, someterse a imposición en el Estado Contratante en el que se realicen las actividades del artista o del deportista.

ARTÍCULO 18

PENSIONES

1. Las pensiones procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar, pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto de las pensiones.

2. Alimentos y otros pagos de manutención efectuados a un residente de un Estado Contratante sólo serán sometidos a imposición en ese Estado. Sin embargo, los alimentos y otros pagos de manutención efectuados por un residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante, serán, en la medida que no sean deducibles para el pagador, sometidos a imposición solamente en el Estado mencionado en primer lugar.

ARTÍCULO 19

FUNCIONES PÚBLICAS

1. (a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, distintas de las pensiones, pagadas por un Estado Contratante o una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales del mismo, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

(b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios son prestados en ese otro Estado y la persona física es un residente de ese Estado que:

- (i) es nacional de ese Estado, o
- (ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.

2. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios y otras remuneraciones, pagadas por razón de servicios prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales.

ARTÍCULO 20

ESTUDIANTES

Las cantidades que un estudiante o una persona en práctica, que sea o que haya sido inmediatamente antes de visitar un Estado Contratante, residente del otro Estado y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o su formación práctica, reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o de formación práctica, no pueden someterse a imposición en ese Estado, siempre que dichos pagos procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

ARTÍCULO 21

OTRAS RENTAS

1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los anteriores Artículos del presente Convenio, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de bienes inmuebles, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado Contratante, realice en el otro Estado Contratante una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado o preste servicios personales independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas estén vinculados efectivamente con dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los anteriores Artículos del presente Convenio, de fuentes situadas en el otro Estado Contratante, pueden también someterse a imposición en ese otro Estado.

IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 22

PATRIMONIO

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, que posea un residente de un Estado Contratante y que esté situado en el otro Estado Contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

2. El patrimonio constituido por bienes muebles, que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante disponga en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

3. El patrimonio constituido por buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre explotados en el tráfico internacional y por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre, sólo puede someterse a imposición en el Estado Contratante del cual la empresa que explota esos buques, aeronaves o vehículos de transporte terrestre es residente.

4. Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado Contratante, que se encuentren situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

ARTÍCULO 23

MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

1. Cuando un residente de Argentina obtenga rentas o posea un patrimonio que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a imposición en Chile, Argentina permitirá:

- (a) deducir del impuesto a la renta de ese residente, un importe equivalente al impuesto pagado sobre la renta en Chile;
- (b) deducir del impuesto sobre el patrimonio de ese residente, un importe equivalente al impuesto sobre el patrimonio pagado en Chile.

Sin embargo, esta deducción en ambos casos no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción, correspondiente, según el caso, a las rentas o al patrimonio que pueden someterse a imposición en Chile.

Cuando de conformidad con cualquier disposición de este Convenio, las rentas obtenidas por un residente de Argentina o el patrimonio que éste posea estén exentos de imposición en Argentina, Argentina podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre las demás rentas o el patrimonio de dicho residente.

2. En Chile, la doble imposición se evitará de la manera siguiente:

- (a) los residentes en Chile que obtengan rentas o posean un patrimonio que, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Argentina, podrán acreditar contra los impuestos chilenos correspondientes a esas rentas o patrimonio los impuestos pagados en Argentina, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación chilena. Este apartado se aplicará a todas las rentas tratadas en este Convenio.
- (b) cuando de conformidad con cualquier disposición de este Convenio, las rentas obtenidas por un residente de Chile o el patrimonio que éste posea estén exentos de imposición en Chile, Chile podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre las demás rentas o el patrimonio de dicho residente.

3. No obstante lo señalado en los apartados 1 y 2 de este Artículo, respecto a las ganancias mencionadas en el apartado 5 del Artículo 13, que obtenga un residente de un Estado Contratante de la enajenación de acciones u otros derechos de participación, distintas de las mencionadas en el apartado 4 de dicho Artículo, que representen indirectamente una participación en el capital de una sociedad residente en el otro Estado Contratante, el Estado mencionado en primer lugar no estará obligado por este Convenio a otorgar los métodos para eliminar la doble imposición establecidos en este Artículo.

ARTÍCULO 24

LIMITACIÓN DE BENEFICIOS

1. Salvo otra disposición de este Artículo que así lo establezca, un residente de un Estado Contratante no tendrá derecho a los beneficios que este Convenio dispone (que no sean los beneficios contenidos en el apartado 3 del Artículo 4, en el apartado 2 del Artículo 9 o en el Artículo 26), a menos que tal residente sea una "persona calificada" en los términos que define el apartado 2, al momento en que los beneficios sean aplicables.

2. Un residente de un Estado Contratante será una persona calificada al momento en que los beneficios de este Convenio serían aplicables si tal residente es:

- (a) una persona física;
- (b) un Estado Contratante, o una subdivisión política o autoridad local del mismo, o una entidad que es completamente de propiedad de tal Estado, subdivisión política o autoridad local;
- (c) una sociedad u otra entidad, si a lo largo de todo el período fiscal que incluye tal momento:

- (i) su principal clase de acciones (y cualquier otra categoría de acciones privilegiadas), es regularmente negociada en uno o más mercados de valores reconocidos y:
 - A) su principal clase de acciones es principalmente negociada en uno o más mercados de valores reconocidos y ubicado en el Estado Contratante del cual la sociedad o entidad es residente; o
 - B) la sede principal de dirección efectiva y control de esa sociedad o entidad está ubicada en el Estado Contratante del cual es residente; o
 - (ii) al menos el 50 por ciento del total de los derechos de voto y del valor de las acciones (y al menos el 50 por ciento de cualquier categoría de acciones privilegiadas) en la sociedad o entidad es de propiedad directa o indirecta de 5 o menos sociedades o entidades que tengan derecho a los beneficios del Convenio en virtud del numeral i) precedente, en la medida en que, en el caso de propiedad indirecta, cada propietario intermediario sea residente de cualquiera de los Estados Contratantes;
- (d) una persona distinta a una persona física,
- (i) sin fines de lucro, establecida y mantenida en ese Estado exclusivamente para propósitos religiosos, de caridad, educacionales o científicos,
 - (ii) que haya sido constituida y sea operada exclusivamente para administrar u otorgar pensiones u otros beneficios similares, siempre que más del 50 por ciento de los beneficiarios de tal persona sean personas físicas residentes de cualquiera de los Estados Contratantes, o
 - (iii) que haya sido constituida y sea operada para invertir fondos en beneficio de personas a las que se refiere el numeral ii) precedente, siempre que sustancialmente todos los ingresos de esta persona sean obtenidos de inversiones realizadas en beneficio de esas personas;
- (e) una persona distinta de una persona física si,
- (i) al menos durante la mitad de los días del período fiscal que incluye ese momento, personas que sean residentes de ese Estado Contratante y que tengan derecho a los beneficios de este Convenio en virtud de los subapartados a), b), o d) o del numeral i) del subapartado c), de este

apartado, posean directa o indirectamente acciones que representen al menos el 50 por ciento del total de los derechos de voto y del valor (y al menos el 50 por ciento de cualquier categoría de acciones privilegiadas) de tal persona, en la medida en que, en el caso de propiedad indirecta, cada propietario intermediario sea residente de ese Estado Contratante, y

- (ii) menos del 50 por ciento de la renta bruta de tal persona, según se determine en el Estado Contratante del cual tal persona es residente para el período fiscal que incluye ese momento, es pagado o adeudado, directa o indirectamente, a personas que no sean residentes de cualquiera de los Estados Contratantes con derecho a los beneficios de este Convenio en virtud de los subapartados a), b) o d), o del numeral i) del subapartado c), de este apartado, en la forma de pagos que sean deducibles para fines de los impuestos cubiertos por este Convenio en el Estado Contratante de residencia de tal persona (pero sin considerar aquellos pagos que se realicen a valores de mercado en el curso ordinario de un negocio por servicios o por bienes tangibles);

3. (a) Un residente de un Estado Contratante tendrá derecho a los beneficios de este Convenio con relación a una renta obtenida del otro Estado Contratante sin importar si es o no una persona calificada, si tal residente desarrolla activamente un negocio en el Estado Contratante donde reside (un negocio distinto a la realización o administración de inversiones por cuenta propia de tal residente, salvo que tales actividades sean bancarias, de seguros o de valores, llevadas a cabo por un banco, aseguradora o intermediario de valores registrado), y la renta obtenida del otro Estado Contratante se deriva en relación con, o es incidental a tal negocio activo.

(b) Si un residente de un Estado Contratante obtiene rentas de un negocio desarrollado por ese residente en el otro Estado Contratante, u obtiene rentas provenientes del otro Estado Contratante desde una empresa asociada, la condición descrita en el subapartado a) debe considerarse cumplida con respecto a tales rentas sólo si la actividad de negocios que desarrolla tal residente en el Estado Contratante donde reside es sustancial en relación a la actividad de negocios desarrollada por tal residente, o su empresa asociada, en el otro Estado Contratante. Se determinará si una actividad de negocios es sustancial para fines de este apartado en base a todos los hechos y circunstancias.

(c) Para efectos de aplicar este apartado, las actividades desarrolladas por personas conectadas a una persona se considerarán desarrolladas por tal persona. Una persona se considerará conectada a otra si una posee al menos el 50 por ciento de la participación en los beneficios de la otra persona (o, en el

caso de una sociedad, al menos el 50 por ciento del derecho a voto y del valor de las acciones de la sociedad o de la participación en las utilidades de la sociedad), o alguna otra persona posee al menos el 50 por ciento de la participación en los beneficios (o en el caso de una sociedad, al menos el 50 por ciento del derecho a voto y del valor de las acciones de la sociedad o de la participación en las utilidades de la sociedad) de una y otra persona. En cualquier caso, una persona se considerará conectada a otra persona si, basándose en todos los hechos y circunstancias relevantes, una persona tiene el control de la otra persona, o ambas están bajo el control de alguna otra persona o personas.

4. Si un residente de un Estado Contratante no tiene derecho a los beneficios de este Convenio en virtud de los apartados precedentes de este Artículo, la autoridad competente del Estado Contratante que en caso contrario hubiese otorgado tales beneficios, tratará sin embargo a tal residente como si tuviera tales derechos o beneficios con relación a una renta o patrimonio específico si esa autoridad competente determina, previo requerimiento de tal residente y luego de considerar todos los hechos y circunstancias relevantes, que el establecimiento, adquisición o mantenimiento de tal residente y el desarrollo de sus operaciones no tuvo como uno de los propósitos principales la obtención de los beneficios de este Convenio. La autoridad competente del Estado Contratante a la cual se le realice el requerimiento, consultará con la autoridad competente del otro Estado Contratante antes de rechazar el requerimiento que realice el residente de ese otro Estado en virtud de este apartado.

5. Para los efectos de las disposiciones precedentes de este Artículo:

- (a) el término "mercado de valores reconocido" significa:
 - (i) en Chile la "Bolsa de Comercio de Santiago", "Bolsa Electrónica de Chile" y "Bolsa de Corredores", y cualquier otra bolsa de valores reconocida por la "Superintendencia de Valores y Seguros" de acuerdo con la ley interna, y en Argentina los mercados de valores que operan bajo el control de la Comisión Nacional de Valores; y
 - (ii) cualquier otro mercado de valores que las autoridades competentes de los Estados Contratantes acuerden;
- (b) el término "principal clase de acciones" significa las acciones ordinarias o comunes de la sociedad, siempre que tal clase de acciones representen la mayoría del derecho a voto y del valor de la sociedad. Si no hay una única clase de acciones ordinarias o comunes que represente la mayoría del derecho a voto y del valor, la "principal clase de acciones" serán aquellas clases de acciones que agregadas representen la mayoría del total del derecho a voto y del valor de la sociedad. En el caso de una

sociedad que participe en una "estructura de sociedades doblemente registradas" (*dual-listed company arrangement*), la "principal clase de acciones" será determinada después de excluir las acciones con derecho a voto especial que fueron emitidas para el establecimiento de tal estructura.

- (c) el término "categoría de acciones privilegiadas", significa cualquier clase de acciones de una sociedad residente de un Estado Contratante que le otorga el derecho al accionista titular a una participación desproporcionada y mayor en las utilidades de la sociedad, a través de dividendos, pagos por devoluciones de capital o de cualquier forma en las rentas generadas en el otro Estado Contratante por un determinado bien o actividad de la sociedad;
- (d) la "sede principal de dirección efectiva y control" de una sociedad estará ubicada en el Estado Contratante en el cual la sociedad es residente sólo si los ejecutivos y gerentes de alto nivel de tal sociedad ejercen en ese Estado Contratante responsabilidades en las decisiones de día a día en materia de estrategia, financiamiento y política de operaciones de la sociedad (incluyendo a las filiales directas e indirectas) más que en cualquier otro Estado, y el personal de tales ejecutivos y gerentes desarrolla las actividades de día a día necesarias para preparar y ejecutar tales decisiones en ese Estado Contratante más que en cualquier otro Estado;
- (e) el término "estructura de sociedades doblemente registradas" (*dual-listed company arrangement*), significa una estructura de acuerdo a la cual dos sociedades públicamente negociadas, no obstante mantener sus personalidades jurídicas, acciones y registros por separado, alinean sus direcciones estratégicas e intereses económicos de sus respectivos accionistas a través de:
 - (i) la designación de directorios comunes (o casi idénticos), salvo que se les aplique regulaciones que lo impidan;
 - (ii) la administración de las operaciones de las dos sociedades sobre una base unificada;
 - (iii) igualación de las distribuciones a sus accionistas de acuerdo a una ratio de igualación aplicable entre las dos sociedades, incluyendo la eventualidad de la liquidación de una o ambas sociedades;
 - (iv) que los accionistas de ambas sociedades votan de hecho como una entidad de decisión única en materias sustanciales que afecten sus intereses combinados, y

garantías cruzadas, o un apoyo financiero similar, para sus obligaciones sustanciales y operaciones, salvo cuando por efecto de requisitos regulatorios se impida tales garantías o apoyo financiero; y

- (f) con relación a otro tipo de sociedades y entidades, el término "acciones" incluye derechos, intereses o participaciones que sean comparables a las acciones.

6. No obstante las demás disposiciones de este Convenio, no se concederán los beneficios de este Convenio en relación a una renta o patrimonio si, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes, es razonable concluir que la obtención de tal beneficio fue uno de los principales propósitos de cualquier estructura o transacción que ha resultado directa o indirectamente en tal beneficio, a menos que se establezca que el otorgamiento del beneficio en esas circunstancias está en conformidad con el objeto y finalidad de las normas pertinentes de este Convenio.

7. Considerando que los objetivos principales de este Convenio son evitar la doble imposición internacional y prevenir la evasión fiscal, los Estados Contratantes acuerdan que, en el evento de que las disposiciones del Convenio sean usadas en forma tal que otorguen beneficios no contemplados ni pretendidos por él, las autoridades competentes de los Estados Contratantes deberán, en conformidad al procedimiento de acuerdo mutuo del Artículo 26, recomendar modificaciones específicas al Convenio. Los Estados Contratantes además acuerdan que cualquiera de dichas recomendaciones será considerada y discutida de manera expedita con miras a modificar el Convenio en la medida en que sea necesario.

8. Cuando una empresa de un Estado Contratante obtiene rentas provenientes del otro Estado Contratante y la renta del otro Estado Contratante se atribuye a un establecimiento permanente que la empresa tiene en una tercera jurisdicción, el beneficio tributario que de otra manera hubiera sido aplicable de acuerdo a otras disposiciones del Convenio, no se aplicará a esa renta si el impuesto total que efectivamente se paga con relación a esa renta en el Estado Contratante mencionado en primer lugar y en la tercera jurisdicción, es menos del 60 por ciento del impuesto que hubiera sido exigible en el Estado mencionado en primer lugar si la renta se hubiera devengado o recibido en ese Estado por la empresa y no fuese atribuible al establecimiento permanente en la tercera jurisdicción. Las rentas a la que se apliquen las disposiciones de este apartado, quedarán sujetas a impuesto de acuerdo a las disposiciones de la legislación interna del otro Estado, no obstante cualquier otra disposición del Convenio.

9. No obstante las disposiciones de este Convenio, un Estado Contratante mantiene su derecho a gravar, de acuerdo con su legislación interna, cualquier renta proveniente de ese Estado y devengada por un residente del otro Estado Contratante (salvo que dicho residente sea una de las personas mencionadas

en el apartado 2, subapartados b) y d) numerales i) y ii) de este Artículo, que cumple los requisitos para tener derecho a los beneficios del Convenio), cuando esa renta no esté efectivamente sujeta a impuesto en el otro Estado Contratante. Los Estados Contratantes identificarán, mediante un canje de notas, las leyes de beneficio fiscal a las que se aplicará esta norma. Asimismo se comprometen a informar respecto de cualquier legislación que se dicte en el futuro y que produzca el mismo efecto.

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 25

NO DISCRIMINACIÓN

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia.
2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Nada de lo establecido en este Artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del Artículo 9, del apartado 6 del Artículo 11 o del apartado 6 del Artículo 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles para determinar los beneficios sujetos a imposición de esa empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar.
4. Las sociedades de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o pueden estar sometidas otras sociedades similares del Estado mencionado en primer lugar.

5. En este Artículo, el término "impuesto" se refiere a los impuestos que son objeto de este Convenio.

ARTÍCULO 26

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a las autoridades competentes del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del Artículo 25, a la del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme con las disposiciones del Convenio.

2. La autoridad competente, si el reclamo le parece fundado y si no puede por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro Estado Contratante a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio.

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes, harán lo posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo mutuo.

4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse directamente a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores.

ARTÍCULO 27

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la información previsiblemente necesaria para aplicar lo dispuesto en este Convenio o para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los Estados Contratantes relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o entidades locales en la medida en que la imposición prevista en la misma no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no vendrá limitado por los Artículos 1 y 2.

2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del apartado 1 será mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del Derecho interno de ese Estado y sólo se revelará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos a que hace referencia el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en relación con los mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán estas informaciones para estos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la información recibida por un Estado Contratante puede ser usada para otros fines cuando dicha información puede ser usada para tales otros fines en virtud de la legislación nacional de ambos Estados y la autoridad competente del Estado que proporciona la información autoriza dicho uso.

3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

- (a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estado Contratante;
- (b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado Contratante;
- (c) suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente Artículo, el otro Estado Contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea interpretado para impedir a un Estado Contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.

5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar información únicamente porque esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la participación en la titularidad de una persona.

ARTÍCULO 28

ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Los Estados Contratantes podrán prestarse asistencia mutua en la recaudación de sus impuestos. Esta asistencia no está limitada por los Artículos 1 y 2. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este Artículo, de conformidad con sus respectivas legislaciones.

ARTÍCULO 29

MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares, de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

ARTÍCULO 30

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

1. Para los fines del apartado 3 del Artículo XXII (Consulta) del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, los Estados Contratantes acuerdan que, sin perjuicio de ese apartado, cualquier disputa entre ellos respecto de si una medida cae dentro del ámbito de este Convenio, puede ser llevada ante el Consejo de Comercio de Servicios conforme a lo estipulado en dicho apartado, pero sólo con el consentimiento de ambos Estados Contratantes. Cualquier duda sobre la interpretación de este apartado será resuelta conforme al apartado 3 del Artículo 26 o, en caso de no llegar a acuerdo con arreglo a este procedimiento, conforme a cualquier otro procedimiento acordado por ambos Estados Contratantes.
2. Nada en este Convenio afectará la aplicación de las actuales disposiciones del D.L. 600 (Estatuto de la Inversión Extranjera) de la legislación chilena, conforme estén en vigor a la fecha de la firma de este Convenio y aún cuando fueren eventualmente modificadas sin alterar su principio general.
3. (a) Nada en este Convenio afectará la imposición en Chile de un residente en Argentina en relación a los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente situado en Chile, tanto bajo el Impuesto de Primera Categoría como el Impuesto Adicional, siempre que el Impuesto de Primera Categoría sea deducible contra el Impuesto Adicional.

(b) No obstante lo señalado en otra disposición de este Convenio, cuando una sociedad que sea residente de Chile tenga un establecimiento permanente en Argentina, los beneficios que se sometan a imposición conforme al apartado 1 del Artículo 7, podrán estar sujetos a una retención de impuestos adicional en Argentina cuando los beneficios sean remesados, de conformidad con su legislación fiscal, pero la retención no excederá del 10 por ciento del monto de dichos beneficios, después de deducir de los mismos el Impuesto a las Ganancias argentino.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 31

ENTRADA EN VIGOR

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor de este Convenio. Este Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación.
2. Las disposiciones del Convenio se aplicarán:
 - (a) en Argentina:
 - (i) con respecto a impuestos retenidos en la fuente, sobre los montos pagados a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor; y
 - (ii) con respecto a otros impuestos sobre la renta y el patrimonio, para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor.
 - (b) en Chile:
 - (i) con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor; y
 - (ii) con respecto al intercambio de información a que se refiere el apartado 5 del Artículo 27 del Convenio, en la medida que esa información se encuentre comprendida en el Artículo 1 del DFL N° 707 y Artículo 154 del DFL N°3, se

encontrará disponible sólo respecto de operaciones bancarias que se lleven a cabo a partir del 1 de enero de 2010.

3. No obstante lo señalado en los apartados precedentes, lo dispuesto en el Artículo 8 tendrá efecto para los años tributarios o ejercicios fiscales que se inicien a partir del 30 de junio de 2012.

ARTÍCULO 32

DENUNCIA

1. Este Convenio permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Contratantes podrá, a más tardar el 30 de junio de cada año calendario posterior a aquél en que el Convenio entre en vigor, dar al otro Estado Contratante un aviso de término por escrito, a través de la vía diplomática.

2. En tal caso, el Convenio dejará de aplicarse:

(a) en Argentina:

(i) con respecto a impuestos retenidos en la fuente, sobre los montos pagados a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario inmediatamente siguiente a aquél en que se da el aviso; y

(ii) con respecto a otros impuestos sobre la renta y el patrimonio, para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario inmediatamente siguiente a aquél en que se da el aviso.

(b) en Chile:

con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquél en que se da el aviso.

3. Con respecto a aquellas situaciones no cubiertas por los incisos a) o b) del apartado 2 de este Artículo, este Convenio dejará de aplicarse a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que se da el aviso de término. Los requerimientos de información recibidos antes de la fecha en que el aviso de término es dado, quedarán sujetos a las disposiciones de este Convenio. Los Estados Contratantes

seguirán sometidos a las obligaciones de confidencialidad establecidas en el Artículo 27 de este Convenio en relación a cualquier información obtenida en virtud de este Convenio.

En fe de lo cual los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Santiago, el 15 de mayo de 2015 en dos originales, en español.

**POR
LA REPÚBLICA ARGENTINA**



**ANÍBAL FERNÁNDEZ
JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS**

**POR
LA REPÚBLICA DE CHILE**



**RODRIGO VALDÉS
MINISTRO DE HACIENDA**

PROTOCOLO

Al momento de la firma del Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para eliminar la doble imposición en relación a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscal, los abajo firmantes han convenido las siguientes disposiciones que constituyen parte integrante del Convenio.

1. Con referencia al Artículo 2, apartado 4:

En el caso que Chile establezca un impuesto al patrimonio con posterioridad a la fecha de la firma del Convenio, ese impuesto quedará comprendido en el mismo.

2. Con referencia al Artículo 3, apartado 1, inciso g), i):

Se entiende que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Secretaría de Hacienda) actuará a través del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, o el Secretario de Hacienda, o sus representantes autorizados.

3. Con referencia al Artículo 4:

(a) El término "residente de un Estado Contratante" incluye:

- (i) una organización sin fines de lucro establecida y mantenida en un Estado Contratante exclusivamente para propósitos religiosos, de caridad, educacionales, científicos u otra similar que se acuerde entre las autoridades competentes; y
- (ii) un fondo de pensiones establecido y regulado de acuerdo al sistema de seguridad social de un Estado Contratante fundamentalmente para el beneficio de los residentes de ese Estado,

aunque todo o parte de su renta o ganancias se encuentre exenta de impuesto en ese Estado de acuerdo a su legislación interna.

Para los fines de este Convenio un fondo de pensiones establecido y regulado de acuerdo al sistema de seguridad social de un Estado Contratante fundamentalmente para el beneficio de los residentes de ese Estado se tratará como beneficiario efectivo de las rentas que perciba.

(b) En relación a las cuentas o fondos de inversión (*collective investment vehicles*) establecidos en un Estado Contratante, que no cumplan con la definición establecida en el apartado 1 del Artículo 4 de este Convenio y no queden cubiertos bajo la letra a) del presente apartado, las disposiciones de este Convenio no serán interpretadas en el sentido de

restringir la imposición, en cualquiera de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, sobre las remesas efectuadas por tales cuentas o fondos de inversión, como tampoco sobre la renta derivada del rescate o enajenación de las cuotas de los partícipes de tales cuentas de inversión o fondos.

4. Con referencia al Artículo 5, apartado 3, inciso b):

Se entiende que las actividades que prosigan en un Estado deben continuar a través de empleados u otras personas físicas que estén presentes en dicho Estado.

5. Con referencia al Artículo 7, apartado 1:

Se entiende que los beneficios de una empresa de un Estado Contratante se considerarán atribuibles al establecimiento permanente situado en el otro Estado Contratante si la empresa vende bienes o mercaderías o desarrolla actividades empresariales en ese otro Estado, que resulten idénticas o sustancialmente similares a las ventas o actividades empresariales desarrolladas a través de dicho establecimiento permanente, salvo que la empresa demuestre que las mismas han sido realizadas de esa manera por razones distintas a las de obtener un beneficio del presente Convenio, o que la empresa lleve a cabo tales ventas o actividades sin que el establecimiento permanente haya tenido participación activa en la realización de dichas ventas o actividades.

6. Con referencia al Artículo 7, apartado 2:

Se entiende que en cada Estado Contratante se atribuirán al establecimiento permanente los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente y con todas las demás personas.

7. Con referencia al Artículo 7, apartado 3:

Se entiende que las disposiciones del apartado 3 del Artículo 7 se aplican sólo a los gastos que pueden ser atribuidos al establecimiento permanente, y por lo tanto resultan deducibles por éste, de acuerdo con las disposiciones de la legislación impositiva del Estado Contratante en el cual el establecimiento permanente está situado.

8. Con referencia a los Artículos 7 y 21:

No obstante las disposiciones del Artículo 7, queda establecido que las rentas provenientes de la actividad pesquera quedan comprendidas en el Artículo 21 del Convenio.

9. Con referencia al Artículo 8:

- (a) Para mayor certeza, se precisa que el servicio de transporte que se realiza con motivo de la explotación minera incluye el carguío y tributa al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del Convenio.
- (b) A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Convenio, dejará de surtir efecto, si lo tuviere, todo acuerdo celebrado con anterioridad entre las partes en materia de doble imposición.

10. Con referencia al Artículo 9:

Se entiende que las disposiciones del apartado 2 del Artículo 9 no serán interpretadas en el sentido que obligan a un Estado Contratante a efectuar un ajuste del monto de los beneficios sujetos a impuesto en ese Estado, a menos que esté de acuerdo que la acción tomada por el otro Estado, en conformidad al apartado 1 del Artículo 9, está justificada tanto en sí misma como con respecto al monto del ajuste hecho a los beneficios por el otro Estado.

11. Con referencia al Artículo 10:

Queda establecido que las disposiciones del apartado 2 del Artículo 10 no limitarán la aplicación del Impuesto Adicional a pagar en Chile en la medida que el Impuesto de Primera Categoría sea deducible contra el Impuesto Adicional.

Cuando una sociedad residente en Argentina pague dividendos o distribuya utilidades que excedan los resultados acumulados sujetos a imposición al final del año fiscal inmediatamente anterior al día del pago o de la distribución, determinado de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias argentina, la limitación del apartado 2 del Artículo 10 no se aplicará respecto del importe de la retención correspondiente por aplicación de las disposiciones de la mencionada Ley de Impuesto a las Ganancias. En tal sentido, se considera que dicha retención tiene un efecto equivalente a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se pagan los dividendos.

12. Con referencia al Artículo 11:

En el caso que en un convenio entre Chile y un tercer Estado, se acuerde una tasa más baja que la prevista en el apartado 2 inciso c) del Artículo 11, esa tasa menor se aplicará automáticamente a los intereses provenientes de Chile cuyo beneficiario efectivo sea un residente de Argentina y a los intereses provenientes de Argentina cuyo beneficiario efectivo sea un residente de Chile, bajo las mismas condiciones como si esa tasa reducida hubiera sido especificada en ese apartado y desde la fecha en que esa tasa menor se empiece a aplicar de acuerdo a lo acordado en ese otro convenio. La autoridad competente de Chile informará, sin demora, a la autoridad competente de

Argentina, que se han cumplido las condiciones para la aplicación de este apartado. Esa tasa menor no podrá ser inferior a 12 por ciento.

13. Con referencia al Artículo 12:

- (a) Cuando se trate de las regalías previstas en el inciso b) del apartado 2 del Artículo 12, la limitación de la imposición en la fuente procederá en la medida en que los respectivos contratos de transferencia de tecnología estén debidamente registrados de acuerdo con las disposiciones de la legislación vigente en Argentina al momento de la firma del Convenio. En caso que por aplicación de la referida legislación argentina no se concretara el registro del contrato de transferencia de tecnología y tal situación diera lugar a la inaplicabilidad de la limitación a la imposición en la fuente prevista en el referido inciso b) del apartado 2 del Artículo 12, siempre que no pudiera unilateralmente encontrarse una solución satisfactoria, la persona afectada podrá someter su caso a la autoridad competente de Chile para intentar resolver la cuestión mediante el procedimiento previsto en el Artículo 26.
- (b) Se entiende que los pagos por el uso o el derecho al uso de programas de computación se encuentran dentro del ámbito de aplicación del apartado 2 inciso b) del Artículo 12. Asimismo, se entiende que cuando los pagos efectuados tienen por objeto adquirir parcialmente los derechos de autor de un programa computacional (sin que el autor o cedente enajene su derecho de propiedad intelectual) y el pago se efectúa a cambio del derecho a usar los derechos (incluso parcialmente) del programa, dichos pagos constituyen una regalía si en ausencia de esa licencia adquirida se produciría una violación de la legislación relativa a derechos de autor. Sin embargo, si los derechos adquiridos en relación a un programa computacional estandarizado (los llamados *shrink-wrapped software*) están limitados a aquellos necesarios para permitir al usuario operar el programa, los pagos recibidos en relación a la transferencia de esos derechos serán tratados como beneficios empresariales a los que se aplica el Artículo 7.
- (c) Se entiende por asistencia técnica la prestación de servicios independientes que involucran la aplicación, por parte del prestador del servicio, de conocimiento especializado no patentable, de una habilidad o experiencia para un cliente.
- (d) El límite a la imposición exigible en el Estado de procedencia de las regalías que establece el apartado 2 inciso b) del Artículo 12 sólo será aplicable cuando dichas regalías se perciban por el propio autor o sus herederos. En caso que el beneficiario no sea el propio autor o sus herederos, se aplicará la limitación prevista en el apartado 2 inciso c) del Artículo 12.

- (e) Se entiende que las rentas obtenidas por una persona física residente de un Estado Contratante con respecto a servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente que constituyan "asistencia técnica" en los términos del inciso c) precedente, estarán comprendidas en las disposiciones del Artículo 12 del Convenio y no en las de su Artículo 14, excepto que se den las circunstancias previstas en el apartado 4 del Artículo 12 o en el inciso b) del Artículo 14, en cuyos casos se aplicará lo dispuesto en este último artículo.

14. Con referencia al Artículo 13:

- (a) No obstante las disposiciones del apartado 6 del Artículo 13, cuando se enajenen bienes distintos a los mencionados en los apartados 1 a 5 del Artículo 13, y se trate de bienes sujetos a registro (entendidos como tales las aeronaves, automotores y embarcaciones no comprendidos en el apartado 3 del Artículo 13), las ganancias podrán someterse a imposición en cualquiera de los Estados Contratantes de acuerdo con las respectivas legislaciones internas.
- (b) Las meras transferencias de activos efectuadas por un residente de un Estado Contratante con motivo de un proceso de reorganización empresarial no producirá efectos fiscales de acuerdo a la legislación interna de cada uno de los Estados Contratantes.

15. Con referencia al Artículo 17:

Se entiende que las rentas a que se refiere el apartado 1 del Artículo 17 comprenden las rentas obtenidas por toda actividad personal ejercida por un residente de un Estado Contratante en el otro Estado Contratante en relación con su reputación o renombre como artista o deportista.

16. Con referencia a los Artículos 18 y 19:

El término "pensiones" se entiende en conformidad con la legislación interna de cada parte y particularmente comprende en el caso de Argentina a las jubilaciones.

17. Con referencia al Artículo 22:

Si en una fecha posterior a la firma del Convenio y este Protocolo, Argentina suscribe un Convenio con un tercer Estado en el que acordara eximir de impuesto o reducir la tasa del impuesto contemplado en el Artículo 22, informará a la autoridad competente de Chile y los Estados Contratantes se comprometen a iniciar negociaciones con el objeto de modificar el presente Convenio.

18. Con referencia al Artículo 24:

La expresión "cuando esa renta no esté efectivamente sujeta a impuesto" incluida en el apartado 9 del Artículo 24 sobre Limitación de Beneficios, comprende tanto las rentas totalmente liberadas del pago de impuestos, como aquellas sujetas a una tributación sustancialmente inferior a la tributación que sería aplicable de acuerdo a las normas generales del Estado de residencia del beneficiario de la renta. En especial, se entenderá que son rentas sujetas a una tributación sustancialmente inferior a la tributación generalmente aplicable, las rentas que, por aplicación de disposiciones especiales que establezcan exenciones o reducciones de impuesto, reducción de la base imponible o la tasa del impuesto, u otro beneficio fiscal, resulten gravadas con impuestos por un monto inferior al 60 por ciento del monto que resultaría aplicable en ausencia de dichas normas.

19. Con referencia al Artículo 25:

- 1) Se entiende que las disposiciones del apartado 3 del Artículo 25 se aplicarán, en el caso de Argentina, siempre que se cumplan los requisitos de registro a los que se refiere el punto 13 letra a) de este Protocolo.
- 2) Se entiende que las disposiciones de la legislación interna de un Estado Contratante que denieguen o hagan decaer exenciones o desgravaciones totales o parciales que la legislación interna de ese Estado otorgue o haya otorgado respecto de los impuestos comprendidos en el Convenio, en razón de producirse una transferencia de ingresos al fisco del otro Estado Contratante, no contravienen lo dispuesto en el Artículo 25 del Convenio.

20. Con referencia al Artículo 26:

En el caso que Argentina cambie su política en lo que respecta al arbitraje como procedimiento de acuerdo mutuo de resolución de controversias, las autoridades competentes se consultarán para considerar la negociación de un acuerdo para la modificación del Convenio. Asimismo, las autoridades competentes harán lo posible para implementar de la manera más eficiente posible el procedimiento de acuerdo mutuo contemplado en el Artículo 26.

21. Disposiciones generales

Considerando que los objetivos principales de este Convenio son la eliminación de la doble imposición internacional y la prevención de la evasión y elusión fiscal, a fin de eliminar los efectos negativos que éstos generan para el intercambio de bienes y servicios y el libre movimiento de los capitales, las tecnologías y las personas, en el caso que de la aplicación del Convenio no resulte en la promoción de sus relaciones económicas, los Estados Contratantes acuerdan que, en cualquier momento después de la expiración de un periodo de tres (3) años desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio, las autoridades competentes podrán reunirse para examinar de

manera expedita la necesidad de efectuar posibles cambios respecto del Convenio, sobre la base de la experiencia obtenida en su aplicación durante los años precedentes y los cambios introducidos en su legislación impositiva nacional.

POR
LA REPÚBLICA ARGENTINA



ANÍBAL FERNÁNDEZ
JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS

POR
LA REPÚBLICA DE CHILE



RODRIGO VALDÉS
MINISTRO DE HACIENDA

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL AND THE PREVENTION OF TAX AVOIDANCE AND EVASION

The Argentine Republic and the Republic of Chile,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax avoidance or evasion (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

Scope of the Convention

Article 1: Persons covered

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2. Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

(a) In the case of Argentina:

(i) The income tax;

(ii) The personal assets tax; and

(iii) The presumptive minimum income tax;

(hereinafter referred to as “Argentine tax”).

(b) In the case of Chile:

The taxes imposed under the Income Tax Act, “Ley sobre Impuesto a la Renta” (hereinafter referred to as “Chilean tax”);

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing

taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes made to their tax laws.

Definitions

Article 3. General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) The terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean, as the context requires, the Republic of Chile or the Argentine Republic; hereinafter Chile or Argentina, respectively;

(b) The term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

The term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(d) The terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(e) The term “international traffic” means any transport by a ship, aircraft or inland transport vehicle, operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship, aircraft or inland transport vehicle is operated solely between places in the other Contracting State;

(f) The term “national” means:

(i) Any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) Any legal person or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

(g) The term “competent authority” means:

(i) In the case of Argentina, the Ministry of Economy and Finance (Secretariat of the Treasury) or its authorized representatives.

(ii) In the case of Chile, the Minister of Finance, the Director of the Internal Revenue Service or their authorized representatives.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4. Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) He shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) If the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) If he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) If he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: If he is a national of both Contracting States, the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. In the absence of a mutual agreement between the competent authorities of the Contracting Parties, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention.

Article 5. Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:

(a) A place of management;

(b) A branch;

(c) An office;

(d) A factory;

(e) A workshop;

(f) A mine, an oil or gas well, a quarry or any other place related to the exploration, extraction or exploitation of natural resources.

3. The term “permanent establishment” also encompasses:

(a) A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than six months;

(b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, if activities of that nature continue within the country for a period or periods aggregating more than 183 days in any 12-month period;

(c) The operation of large or valuable equipment in a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days in any 12-month period.

The duration of the activities referred to in this paragraph shall be determined by aggregating periods during which activities are conducted in a Contracting State by associated enterprises,

provided that the activities of the enterprise in that State are connected to or are substantially the same as the activities conducted in that State by the associate enterprise. In any event, the period during which two or more associated enterprises carry out competing activities shall be counted only once. An enterprise shall be deemed to be associated with another enterprise when one of them participates directly or indirectly in the management, control, or capital of the other, or when the same person or a group of persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of both enterprises.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

(a) The use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(c) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of collecting information, for the enterprise;

(e) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, providing information or conducting scientific research for the enterprise;

Provided that such activity is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, and subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and thus habitually concludes contracts, negotiates the essential elements of contracts or interacts with specific individuals in such a way that that interaction results in the conclusion of contracts which in the light of the legal bonds between the person and the company are contracts on behalf of and at the expense of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent acting on behalf of several persons and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, an individual acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Taxation of income

Article 6. Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Agreement, the term “immovable property” shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7. Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that (a) permanent establishment;

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits derived by an enterprise of a Contracting State from the activity of granting insurance or reinsurance covering property situated in the other Contracting State or persons which are residents of that other State, at the time of the conclusion of the insurance contract, may be taxed in that other State, whether or not the enterprise carries on its activity in that other State through a permanent establishment situated therein. However, in such case (in the absence of a permanent establishment), the tax charged shall not exceed:

- (a) 2.5 per cent of the gross amount of the premium in the case of reinsurance policies, and
- (b) 10 per cent of the gross amount of the premiums in the case of all other insurance policies.

5. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this article.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8. International transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships, aircraft or inland transport vehicle in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this article, the profits from the operation of ships, aircraft or ground transportation vehicles in international traffic include:

(a) Gross income derived directly from the operation of ships, aircraft and ground transportation vehicles in international traffic;

(b) Profits from the charter or rental on a bareboat basis of ground transportation vehicles, ships or aircraft;

(c) Profits obtained from the use or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used to transport goods or merchandise; and

(d) Interest on amounts generated directly by the operation of ships, aircraft and ground transportation vehicles in international traffic;

where such rental or such use or interest, whether in the terms of paragraph (b), (c) or (d), is incidental to the operation of ships, aircraft or ground transportation vehicles in international traffic; 3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9. Associated enterprises

1. Where:

(a) An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

And in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to

one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply in the case of fraud, wilful default or negligence.

Article 10. Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this article means income from “jouissance” shares or “jouissance” rights or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11. Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 4 per cent of the gross amount of the interest derived from a sale on credit paid by the purchaser of machinery and equipment to the beneficial owner that is the seller of the machinery and equipment;

(b) 12 per cent of the gross amount of the interest derived from.

(i) Loans granted by banks and insurance companies;

(ii) Bonds and securities that are regularly and substantially traded on a recognized securities market;

(c) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

3. The term “interest” as used in this article means income from debt-claims of every kind, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, as well as any other income the tax laws of the State in which it arises include with income from loaned amounts. The term “interest” shall not include income under article 10.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with (a) such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or a fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or a fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the fees shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

7. The provisions of this article shall not apply if it is the main purpose or one of the purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this article by means of that creation or assignment.

Article 12. Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

3. The term “royalties” as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, news, any copyright of literary, artistic or scientific work (including computer programs), cinematograph films or films, tapes and other means of image or sound reproduction, any patents, trademark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience and fees for technical services.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.

5. Income shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the fees shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13. Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships, aircraft or ground vehicles in international traffic derives from the alienation of such ships, aircraft or ground vehicles, or of movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other comparable interests, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in that other Contracting State.

5. Gains, other than those to which paragraph 4 applies, derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company, or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State if the alienator, at any time during the 365 days preceding such alienation, held directly or indirectly at least 20 per cent of the capital of that company or entity. However, if such participation in the capital of the enterprise is lower than 20 per cent, the tax so charged shall not exceed 16 per cent of the gain.

6. Gains from the alienation of any property other than those gains mentioned in the previous paragraphs may be taxed in the Contracting State in which they arise according to the law of that State.

Article 14. Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) If he or she has a fixed base regularly available to him or her in the other Contracting State for the purpose of performing his or her activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

(b) If his or her stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the calendar year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his or her activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15. Dependent personal services

1. Subject to the provisions of articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if:

(a) The recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the calendar year concerned, and

(b) The remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) The remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment that is exercised aboard a ship, aircraft or ground vehicle operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, other than remuneration derived by a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.

Article 16. Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his or her capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17. Artistes and sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident's personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his or her capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself or herself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

Article 18. Pensions

1. Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the pension.

2. Alimony and other maintenance payments paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. However, alimony and other maintenance payments paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, shall, to the extent it is not allowable as a relief for taxation purposes deductible for the payer, be taxable only in the first-mentioned State.

Article 19. Government service

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

(i) Is a national of that State; or

(ii) Did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of articles 15, 16 and 17 shall apply to wages, salaries and other remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.

Article 20. Students

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his or her education or training receives for the purpose of his or her maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21. Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Taxation of capital

Article 22. Capital

1. Capital represented by immovable property, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting

State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital of an enterprise of a Contracting State that operates ships, aircraft or ground vehicles in international traffic represented by such ships, aircraft or ground vehicles, and by movable property pertaining to the operation of ships, aircraft or ground vehicles, shall be taxable only in that State.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State, situated in the other Contracting State, shall be taxable only in that other State.

Methods for the elimination of double taxation

Article 23. Methods for the elimination of double taxation

1. Where a resident of Argentina derives income or owns capital which may be taxed in Chile in accordance with the provisions of this Agreement, Argentina shall allow:

(a) As a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Chile;

(b) As a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Chile;

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or to the capital which may be taxed in Chile.

Where in accordance with any provision of this Agreement, income derived or capital owned by a resident of Argentina is exempt from tax in Argentina, Argentina may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

2. In the case of Chile, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Residents in Chile who derive income or own capital which may, in accordance with the provisions of this Agreement, be taxed in Argentina, may credit the tax so paid against any Chilean tax payable in respect of the same income or capital, subject to the applicable provisions of the laws of Chile. This paragraph shall apply to all income referred to in this Agreement.

(b) Where in accordance with any provision of this Agreement income derived or capital owned by a resident of Chile is exempt from tax in Chile, Chile may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, with respect to the gains referred to in article 13, paragraph 5, derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other participation rights, other than those referred to in paragraph 4 of that article, which indirectly represent a share in the capital of a company which is a resident of the other Contracting State, the first-mentioned State shall not be required by this Agreement to provide the methods for the elimination of double taxation established in this article.

Article 24. Entitlement to benefits

1. Except as otherwise provided in this article, a resident of a Contracting State shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Agreement (other than a benefit under paragraph 3 of article 4, paragraph 2 of article 9 or article 26) unless such resident is a “qualified person”, as defined in paragraph 2, at the time that the benefit would be accorded.

2. A resident of a Contracting State shall be a qualified person at a time when the benefits under this Agreement would apply if that resident is:

(a) An individual;

(b) A Contracting State or a political subdivision or local authority thereof, or an entity entirely owned by that State, political subdivision or local authority;

(c) A company or other entity, if throughout the taxable period that includes that time:

(i) Its principal class of shares (and any other disproportionate class of shares) is regularly traded on one or more recognized stock exchanges; and either:

(A) Its principal class of shares is primarily traded on one or more recognized stock markets located in the Contracting State of which the company or entity is a resident; or

(B) The company’s or entity’s primary place of management and control is in the Contracting State of which it is a resident; or

(ii) At least 50 per cent of the aggregate vote and value of the shares (and at least 50 per cent of any disproportionate class of shares) in the company or entity is owned directly or indirectly by five or fewer companies or entities entitled to benefits under subparagraph (i) above of the Agreement, provided that, in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a resident of either Contracting State;

(d) A person other than an individual, that

(i) Is a not-for-profit institution, established and maintained in that State exclusively for religious, charitable, educational or scientific purposes;

(ii) Is incorporated and operated solely as a pension or similar fund, provided that more than 50 per cent of the beneficial interests in that person are owned by individuals resident of either Contracting State; or

(iii) Is incorporated and operated as an investment vehicle for the persons referred to in subparagraph (ii) above, provided that substantially all the person’s income is derived from investments made for such persons;

(e) A person other than an individual if

(i) At that time and on at least half of the days of the taxable period that includes that time, persons who are residents of that Contracting State and who are entitled to the benefits of this Agreement under subparagraphs (a), (b) or (d) or subparagraph (i) of subparagraph (c), of this paragraph, own, directly or indirectly, shares representing at least 50 per cent of the aggregate vote and value (and at least 50 per cent of any disproportionate class of shares) of the shares in the person, provided that, in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a resident of that Contracting State; and

(ii) Less than 50 per cent of the person’s gross income, as determined in the Contracting State of which the person is a resident for the taxable period that includes that time, is paid or accrued, directly or indirectly, in the form of payments that are deductible for purposes of the

taxes covered by this Agreement in the person's Contracting State of residence (but not including arm's length payments in the ordinary course of business for services or tangible property), to persons that are not residents of either Contracting State entitled to the benefits of this Agreement under subparagraphs (a), (b) or (d) or subparagraph (i) of subparagraph (c), of this paragraph;

3. (a) A resident of a Contracting State shall be entitled to benefits under this Agreement with respect to an item of income derived from the other Contracting State, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the conduct of a business in the first-mentioned Contracting State (other than the business of making or managing investments for the resident's own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer) and the income derived from the other Contracting State emanates from, or is or is incidental to that business.

(b) If a resident of a Contracting State derives income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting State, or derives income arising in the other Contracting State from a connected enterprise, the conditions described in subparagraph (a) shall be considered to be satisfied with respect to such income only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned Contracting State to which the income is related is substantial in relation to the same or complementary business activity carried on by the resident or such connected enterprise in the other Contracting State. Whether a business activity is substantial for the purposes of this paragraph shall be determined based on the facts and circumstances.

(c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting State shall be deemed to be conducted by such resident. A person shall be a "connected person" if he or she owns at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of its dividends), or another person owns at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of its dividends) in each person. In any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.

4. If a resident of a Contracting State is not entitled to benefits of this Agreement pursuant to the preceding paragraphs of this article, the competent authority of the Contracting State that otherwise would have granted such benefits may, nevertheless, grant the benefits of this Agreement in respect of a specific item of income or capital, if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority, taking into account all the relevant facts and circumstances, that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under this Agreement. The competent authority of the Contracting State to which a request has been made, under this paragraph, by a resident of the other State, shall consult with the competent authority of that other Contracting State before either granting or denying the request.

5. For the purposes of the previous paragraphs of this article:

(a) The term "recognized stock exchange" means:

(i) In Chile, the "Bolsa de Comercio de Santiago", the "Bolsa Electrónica de Chile" and the "Bolsa de Corredores" exchanges, and any other stock exchange recognized by the securities and insurance superintendency in accordance with domestic law and, in Argentina, the stock markets that operate under the control of the National Securities Commission; and

(ii) Any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States;

(b) The term “principal class of shares” means the ordinary or common shares of the company, provided that that class of shares represents the majority of the aggregate vote and value of the company. If no single class of ordinary or common shares represents the majority of the aggregate vote and value of the company, the “principal class of shares” are those classes that in the aggregate represent a majority of the aggregate vote and value. In the case of a company participating in a dual-listed company arrangement, the principal class of shares shall be determined after excluding the special voting shares issued for the establishment of that arrangement.

(c) The term “disproportionate class of shares” means any class of shares of a company resident in one of the Contracting State that entitles the shareholder to disproportionately higher participation, through dividends, redemption payments or otherwise, in the earnings generated in the other Contracting State by particular assets or activities of the company;

(d) A company’s “primary place of management and control” is in the Contracting State of which it is a resident only if the executive officers and senior management employees of the company exercise day-to-day responsibility for more of the strategic, financial and operational policy decision for the company (including direct and indirect subsidiaries), and the staff of such persons conduct more of the day-to-day activities necessary for preparing and implementing those decisions, in that Contracting State, than in any other State;

(e) The term “dual-listed company arrangement” means an arrangement under which two publicly traded companies, despite keeping their legal personalities, shares and records separate, align their strategic management and the economic interests of their respective shareholders through:

(i) The appointment of common (or almost identical) boards of directors, unless applicable regulations do not so permit;

(ii) The unified management of the operations of the two companies;

(iii) Equal distributions to shareholders following an equalization ratio applicable to the two companies, allowing for the possibility of the liquidation of one or both of the companies;

(iv) Actual voting by the shareholders in both companies as a single decision-making entity on substantial matters affecting their combined interests, and cross-collateralization, or similar financial support, for substantial obligations and operations, except when such collateral or financial support are prevented by regulatory requirements; and

(f) With respect to other types of companies and entities, the term “shares” includes rights, interests or participations that are comparable to shares.

6. Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.

7. Considering that the main objectives of this Agreement are the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion, the Contracting States hereby agree that, in the event that the provisions of the Agreement are used in such a way as to afford benefits not contemplated

or intended therein, the competent authorities of the Contracting States must, in accordance with the mutual agreement procedure of article 26, recommend specific amendments to the Agreement. The Contracting States also hereby agree that any such recommendation shall be considered and discussed promptly with a view to making the necessary amendments to the Agreement.

8. Where an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and the first-mentioned State treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction, the tax benefits that otherwise would have applied pursuant to other provisions of the Agreement shall not apply to that item of income if the aggregate tax effectively paid on that item of income in the first-mentioned Contracting State and in the third jurisdiction, is less than 60 per cent of the tax that would be imposed if the item of income were paid or received in that State by the enterprise and were not attributable to the permanent establishment in the third jurisdiction. Any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic laws of the other State, notwithstanding any other provisions of the Convention.

9. Notwithstanding the provisions of this Agreement, a Contracting State retains the right to encumber, in accordance with its domestic laws, any item of income from that State and paid by a resident of the other Contracting State (unless that resident is one of the persons referred to in paragraph 2, subparagraphs (b) and (d), subdivisions (i) and (ii) of this article, and satisfies the requirements for entitlement to the benefits of the Agreement), where that item of income is not effectively taxable in the other Contracting State. The Contracting States shall identify, through an exchange of notes, the tax relief laws to which this rule shall apply. Furthermore, they undertake to inform each other of any future laws that would produce the same effect.

Special provisions

Article 25. Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. The provisions of this article shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of article 9, paragraph 6 of article 11 or paragraph 6 of article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith

which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this article, the term “tax” refers to taxes covered by this Agreement.

Article 26. Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 27. Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorizes such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) To carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) To supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 28. Assistance in the collection of taxes

The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article in accordance with their respective laws.

Article 29. Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30. Miscellaneous provisions

1. For purposes of paragraph 3 of article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of article 26 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.

2. Nothing in this Agreement shall affect the application of the existing provisions of the Chilean legislation DL 600 (Foreign Investment Statute) as they are in force at the time of signature of this Agreement and as they may be amended from time to time without changing the general principle thereof.

3. (a) Nothing in this Agreement shall affect the taxation in Chile of a resident in Argentina in respect of profits attributable to a permanent establishment situated in Argentina, under both the

first category tax and the additional tax but only as long as the first-category tax is deductible from the additional tax.

(b) Notwithstanding any other provision of this Agreement, when a company which is a resident of Chile has a permanent establishment in Argentina, the profits subject to tax under paragraph 1 of article 7 may be subject to an additional withholding tax in Argentina when profits are paid out, in accordance with its tax laws, but the withholding shall not exceed 10 per cent of the amount of that profit, after deduction of Argentine income taxes.

Final provisions

Article 31. Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify the other through the diplomatic channel of the completion of the procedures required by its laws for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the last notification.

2. The provisions of this Agreement shall apply:

(a) In Argentina:

(i) In respect of taxes withheld at source, on amounts paid on or after the first of January in the calendar year following the year in which the Agreement enters into force; and

(ii) In respect of other taxes on income and capital for fiscal years beginning on or after the first of January in the calendar year following the year in which the Agreement enters into force.

(b) In Chile:

(i) In respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year following the year in which this Agreement enters into force; and

(ii) The exchange of information referred to in paragraph 5 of article 27 of the Agreement shall be available only in respect of banking operations carried out on or after 1 January 2010, to the extent that such information is covered by article 1 of DFL No. 707 and article 154 of DFL No. 3..

3. Notwithstanding the preceding paragraphs, article 8 shall have effect for tax or fiscal years starting as of 30 June 2012.

Article 32. Termination

1. This Agreement shall remain in force indefinitely, but any of the Contracting States may, not later than 30 June of each calendar year following the year in which the Agreement enters into force, provide the other Contracting State with a written notice of termination through the diplomatic channel.

2. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

(a) In Argentina:

(i) In respect of taxes withheld at source, on amounts paid on or after the first of January of the calendar year following the year in which the notice was given; and

(ii) In respect of other taxes on income and capital for fiscal years beginning on or after the first of January of the calendar year following the year that in which the notice is given.

(b) In Chile:

In respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, made available or accounted for as an expense, on or after the first day of January of the calendar year following the year in which the notice is given;

3. With regard to those situations that are not covered by subparagraphs (a) or (b) of paragraph 2 of this article, this Agreement shall cease to have effect on the first day of January of the calendar year following the year in which the notice of termination is given. Requests for information received prior to the date on which a notice of termination is given shall be subject to the provisions of this Agreement. The Contracting States shall remain bound by the confidentiality obligations set out in article 27 of this Agreement with respect to any information obtained under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Santiago on 15 May 2015, in two originals in Spanish.

For the Argentine Republic:

ANÍBAL FERNÁNDEZ

Chief of Cabinet of Ministers

For the Republic of Chile:

RODRIGO VALDÉS

Minister of Finance

PROTOCOL

At the time of the signing of the Agreement between the Argentine Republic and the Republic of Chile for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned agreed upon the following provisions, which shall be an integral part of the Agreement.

1. With reference to article 2, paragraph 4:

If Chile establishes a tax on capital after the date of signature of the Agreement, the tax shall be included in the Agreement.

2. With reference to article 3, paragraph 1, subparagraph (g) (i):

It is understood that the Ministry of Economic Affairs and Public Finance (Ministry of Finance) shall act through the Minister of Economic Affairs and Public Finances, or the Secretary of Finance, or their authorized representatives.

3. With reference to article 4:

(a) The term “resident of a Contracting State” includes:

(i) A non-profit organization established and maintained in a Contracting State solely for religious, charitable, educational, scientific or other similar purposes to be agreed between the competent authorities; and

(ii) A pension fund established and regulated in accordance with the social security system of a Contracting State primarily for the benefit of the residents of that State,

although all or part of its income or profit may be exempt from tax in that State in accordance with its domestic laws.

For the purposes of this Agreement, a pension fund established and regulated in accordance with the social security system of a Contracting State primarily for the benefit of the residents of that State shall be treated as a beneficial owner of any income it might derive.

(b) In respect of any accounts or investment funds (collective investment vehicles) established in a Contracting State that do not comply with the definition set out in article 4, paragraph 1, of this Agreement and that are not covered under subparagraph (a) of this paragraph, the provisions of this Agreement shall not be construed so as to restrict the taxation in either Contracting State in accordance with its domestic laws, of remittances made by such accounts or investment funds or of the income derived from the recovery or transfer of fees charged to participants in those accounts or investment funds.

4. With reference to article 5, paragraph 3, subparagraph (b):

It is understood that the activities that they conduct in a State must be continued by means of employees or other individuals present in the State.

5. With reference to article 7, paragraph 1:

It is understood that the profits of an enterprise of one Contracting State shall be considered to be attributable to the permanent establishment situated in the other Contracting State if the company sells goods or merchandise or conducts business activities in that other State that are identical or substantially similar to the sales or business activities conducted through that permanent establishment, unless the company demonstrates that they were done that way for

reasons other than to derive a benefit from this Agreement or that the company conducted those sales or activities without the permanent establishment having played an active role therein.

6. With reference to article 7, paragraph 2:

It is understood that in each Contracting State the profits that the permanent establishment would have derived if it were a distinct and separate enterprise undertaking the same or similar activities, in the same or similar conditions, and dealing wholly independently from the enterprise of which it is a permanent establishment and all other persons, shall be attributed to that permanent establishment.

7. With reference to article 7, paragraph 3:

It is understood that the provisions of paragraph 3 of article 7 shall apply only to any expenses that might be attributed to the permanent establishment, and therefore the permanent establishment may deduct them, in accordance with the provisions of the tax laws of the Contracting State in which the permanent establishment is located.

8. With reference to articles 7 and 21:

Notwithstanding the provisions of article 7, income from fishing activities shall fall under article 21 of the Agreement.

9. With reference to article 8:

(a) For greater certainty, transportation services performed during mining shall include loading and shall incur taxes under the provisions of article 8 of the Agreement.

(b) Any previous agreement between the parties concerning double taxation shall cease to have effect from the date of entry into force of this Agreement.

10. With reference to article 9:

It is understood that the provisions of paragraph 2 of article 9 shall not be construed so as to oblige a Contracting State to adjust the amount of profit subject to tax in that State, unless it is agreed that the action taken by the other State, in accordance with article 9, paragraph 1, is justified both in itself and in respect of the amount of the adjustment to the profit by the other State.

11. With reference to article 10:

The provisions of paragraph 2 of article 10 shall not limit the application of the additional tax payable in Chile, provided that the first category tax is deductible from the additional tax.

Where a company resident in Argentina pays dividends or distributes profits that exceed the taxable accumulated surplus at the end of the fiscal year immediately prior to the date of payment or distribution, determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act of Argentina, the limitation in paragraph 2 of article 10 shall not apply in respect of the amount of the corresponding withholding through the implementation of the provisions of the above-mentioned Act. In that regard, the withholding shall be considered to have the same effect as imposing a tax the company in respect of the profits used to pay the dividends.

12. With reference to article 11:

If in an agreement between Chile and a third State a rate lower than that provided for under paragraph 2 (c) of article 11 is agreed, that lower rate shall apply automatically to interest derived from Chile beneficially owned by a resident of Argentina and interest from Argentina beneficially owned by a resident of Chile, under the same conditions as if that reduced rate was specified in that paragraph and from the date when the lower rate begins applying in accordance with that

other agreement. The competent authority of Chile shall promptly inform the competent authority of Argentina that the conditions have been met for the implementation of this paragraph. That lower rate shall not be less than 12 per cent.

13. With reference to article 12:

(a) In the case of the royalties provided for under subparagraph (b) of paragraph 2 of article 12, the limitation on the taxation at source shall proceed to the extent that the respective contracts for technology transfer are duly registered in accordance with the provisions of the laws in force in Argentina at the time of the signing of the Agreement. In the event that through the application of the aforementioned Argentine laws registration of the contract for the transfer of technology is not finalized and that situation leads to the inapplicability of the limitations on the taxation at source provided for in the above-mentioned subparagraph (b) of paragraph 2 of article 12, provided that a satisfactory solution could not be unilaterally found, the affected person may present his case to the competent authority of Chile to attempt to resolve the issue through the procedure provided for in article 26.

(b) It is understood that payments for the use of, or the right to use software fall under paragraph 2, subparagraph (b), of article 12. Similarly, it is understood that payments made to acquire a portion of the copyright to a software (without the author or assignor transferring his intellectual property rights) and payments made in exchange for the right to use the rights (including partially) to the software, shall constitute a royalty if in the absence of a purchased licence there would be a breach of copyright laws. However, if rights acquired in respect of a standardized computational programme (shrink-wrapped software) are limited to those necessary to allow the user to operate the programme, payments received in respect of the transfer of those rights shall be treated as business profits, to which article 7 shall apply.

(c) Technical assistance is understood to be the provision of independent services involving the application, by the service provider, of non-patentable knowledge, skill or experience, to a client.

(d) The limitation on tax liability in the State in which the royalties arise established in paragraph article 12, paragraph 2, subparagraph (b) shall apply only where such royalties are paid to the author in person or his heirs and assigns. In the event that the beneficiary is not the author himself or his or her assigns, the limitation provided for in paragraph 2, subparagraph (c), of article 12 shall apply.

(e) It is understood that income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character that constitute “technical assistance” as understood in subparagraph (c) above, shall fall under the provisions of article 12 of the Agreement and not article 14, except on the occurrence of the circumstances provided for in paragraph 4 of article 12 or in subparagraph (b) of article 14, in which cases this latter article shall apply.

14. With reference to article 13:

(a) Notwithstanding the provisions of paragraph 6 of article 13, in cases of transfers of property other than those referred to in paragraphs 1 to 5 of article 13, involving property subject to registration (understood as aircraft, motor vehicles and vessels not covered under paragraph 3 of article 13), gains may be taxed in either Contracting State in accordance with their respective domestic laws.

(b) Mere transfers of assets conducted by a resident of a Contracting State as part of the reorganization of a business shall have no fiscal effects, in accordance with the domestic laws of each of the Contracting States.

15. With reference to article 17:

It is understood that the income referred to in paragraph 1 of article 17 includes income derived from any personal activities performed by a resident of a Contracting State in the other Contracting State related to the resident's reputation or renown as an entertainer or sportsperson.

16. With reference to articles 18 and 19:

The term "pensions" is understood in accordance with the domestic laws of each party and in the case of Argentina covers retirements in particular.

17. With reference to article 22:

If at a date subsequent to the signature of the Agreement and this Protocol Argentina signs an agreement with a third State in which it agrees to exempt from tax or reduce the rate of tax covered by article 22, it shall inform the competent authority of Chile and the Contracting States undertake to begin negotiations with a view to amending this Agreement.

18. With reference to article 24:

The expression "when that income is not effectively subject to tax" contained in paragraph 9 of article 24 on limitation of benefits covers both income totally free of income tax and income subject to taxation substantially lower than the taxation that would be applicable in accordance with the general rules of the State of residence of the beneficiary of the income. In particular, it is understood that income subject to substantially lower tax than that generally applicable includes income that, owing to implementation of special provisions establishing tax exemptions or reductions, to a reduction in the tax base or the rate of tax, or to some other fiscal advantage, is subject to taxes amounting to less than 60 per cent of the amount that would be applicable in the absence of such rules.

19. With reference to article 25:

(1) It is understood that the provisions of paragraph 3 of article 25 shall apply, in the case of Argentina, provided that the registration requirements referred to in point 13 (a) of this Protocol are met.

(2) It is understood that the provisions of the domestic laws of a Contracting State that deny or invalidate any total or partial exemption or relief that the domestic laws of that State grants or has granted in respect of taxes covered by the Agreement, if there is a transfer of income to the treasury of the other Contracting State, do not violate article 25 of the Agreement.

20. With reference to article 26:

If Argentina changes its policy with regard to arbitration as a mutually agreed procedure for the settlement of disputes, the competent authorities shall consult each other in order to consider the negotiation of an agreement to amend the Agreement. In addition, the competent authorities shall endeavour to implement as efficiently as possible the mutually agreed procedure provided for in article 26.

21. General provisions

Considering that the main objectives of this Agreement are to eliminate international double taxation and prevent tax evasion and avoidance, in order to eliminate their negative effects on the exchange of goods and services and the free movement of capital, technologies and individuals, if

implementation of the Agreement does not lead to the promotion of their economic relations, the Contracting States agree that, at any time after the expiration of the three- year period following the date of entry into force of this Agreement, the competent authorities may meet to consider expeditiously the need for possible changes to the Agreement, on the basis of the experience gained in its implementation during the previous years and changes to their domestic tax laws.

For the Argentine Republic:

ANÍBAL FERNÁNDEZ

Chief of the Cabinet

For the Republic of Chile

RODRIGO VALDÉS

Minister of Finance

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI
EN VUE D'ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PRÉVENIR
L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES

La République argentine et la République du Chili,

Désireuses de développer davantage leurs relations économiques et de renforcer leur coopération en matière fiscale,

Ayant l'intention de conclure une convention en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par le biais de l'évasion ou de la fraude fiscale (y compris par le biais d'accords de chalandage fiscal visant à obtenir les allégements prévus par la présente Convention au profit indirect de personnes résidentes d'États tiers),

Sont convenues de ce qui suit :

Portée de la Convention

Article premier. Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont résidentes d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune prélevés pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) Du point de vue de l'Argentine,

i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur la fortune ;

iii) l'impôt sur le revenu minimum présumé

(ci-après « l'impôt argentin »).

b) Du point de vue du Chili,

les impôts imposés en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu « Ley sobre Impuesto a la Renta » (ci-après dénommés « l'impôt chilien »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Définitions

Article 3. Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les termes « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la République argentine ou la République du Chili ; ci-après dénommées « Argentine » ou « Chili », respectivement ;

b) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

d) Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne résidente d'un État contractant et une entreprise exploitée par une personne résidente de l'autre État contractant ;

e) L'expression « trafic international » désigne tout transport par un navire, un aéronef ou un véhicule de transport terrestre exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque ledit navire, aéronef ou véhicule de transport terrestre n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;

f) Le terme « ressortissant(e) » désigne :

i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d'un État contractant ;

ii) toute personne morale ou association tirant son statut en tant que tel des lois en vigueur dans un État contractant.

g) L'expression « autorité compétente » désigne :

i) Dans le cas de l'Argentine, le Ministère de l'économie et des finances (Secrétariat du Trésor) ou ses représentants et représentantes autorisé(e)s.

ii) Dans le cas du Chili, le ou la Ministre des finances, le directeur ou la directrice de l'Internal Revenue Service, ou leurs représentants et représentantes autorisé(e)s.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4. Personne résidente

1. Au sens de la présente Convention, le terme « personne résidente d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme résidente uniquement de l'État où elle dispose d'une résidence permanente ; si elle dispose d'une résidence permanente dans les deux États, elle est considérée comme résidente seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'une résidence permanente dans aucun des États, elle est considérée comme résidente uniquement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente uniquement de l'État dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résidente des deux États contractants, son statut sera déterminé comme suit : si elle a la nationalité des deux États contractants, ces États tranchent la question d'un commun accord. À défaut d'un accord amiable entre les autorités compétentes des Parties contractantes, cette personne ne peut bénéficier d'aucun des allègements ou exonérations d'impôts prévus par la présente Convention.

Article 5. Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation des ressources naturelles.

3. Le terme « établissement stable » concerne également :

a) Un chantier de construction, un projet de montage ou d'installation ou des activités de supervision découlant de ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six mois.

b) La fourniture, par une entreprise, de services (y compris de services de conseil) par l'intermédiaire d'employé(e)s ou de toute autre personne engagé(e)s par l'entreprise à cette fin, si des activités de cette nature se poursuivent dans le pays pendant une période ou des périodes cumulées de plus de 183 jours dans un intervalle de 12 mois.

c) L'exploitation d'équipements de grande taille ou de grande valeur dans un État contractant pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois.

La durée des activités visées au présent paragraphe est déterminée en cumulant les périodes pendant lesquelles des activités sont exercées dans un État contractant par des entreprises associées, à condition que les activités de l'entreprise dans cet État soient corrélées ou substantiellement identiques aux activités exercées dans cet État par l'entreprise associée. En tout état de cause, la période pendant laquelle deux ou plusieurs entreprises associées exercent des activités concurrentes n'est comptée qu'une seule fois. Une entreprise est considérée comme « associée à une autre entreprise » lorsque l'une d'elles participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital de l'autre, ou lorsque la même personne ou groupe de personnes participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des deux entreprises.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme « établissement stable » n'englobe pas :

a) l'utilisation d'installations pour l'entreposage ou l'exposition de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) l'exploitation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins d'entreposage ou d'exposition ;

c) l'exploitation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de traitement par une autre entreprise ;

d) le maintien d'une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de collecter des informations, pour l'entreprise ;

e) le maintien d'une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de publicité, de fournir des informations ou de mener des études scientifiques pour l'entreprise ;

à condition que cette activité ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, et sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, par cette activité, conclut régulièrement des contrats, négocie les éléments essentiels de contrats ou entretient des relations avec des personnes déterminées de telle sorte que cette interaction aboutit à la conclusion de contrats qui, compte tenu des liens juridiques existant entre la personne et la société, sont des contrats conclus pour le compte et aux frais de l'entreprise, celle-ci est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas lorsque la personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant exerce dans le premier État une activité professionnelle en qualité d'agent ou agente indépendant(e) agissant pour le compte de plusieurs personnes et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent ou une agente indépendant(e) au sens du présent paragraphe à l'égard de l'une quelconque de ces entreprises.

7. Le fait qu'une société qui est résidente d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Imposition des revenus

Article 6. Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'une personne résidente dans un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens du présent Accord, le terme « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation de l'État contractant où les biens considérés sont situés. Dans tous les cas, ce terme comprend les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7. Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou

analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'activité consistant à accorder une assurance ou une réassurance couvrant des biens situés dans l'autre État contractant ou des personnes résidentes de cet autre État, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, sont imposables dans cet autre État, que l'entreprise exerce ou non son activité dans cet autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Toutefois, dans ce cas (en l'absence d'un établissement stable), l'impôt perçu ne doit pas dépasser :

- a) 2,5 % du montant brut de la prime dans le cas des polices de réassurance ;
- b) 2,5 % du montant brut de la prime dans le cas des autres polices de réassurance.

5. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8. Transport international

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules de transport terrestre ne sont imposables que dans cet État.

2. Aux fins du présent article, les bénéfices tirés de l'exploitation de navires, d'aéronefs ou de véhicules de transport terrestre en trafic international comprennent notamment :

- a) le revenu brut provenant directement de l'exploitation de navires, d'aéronefs et de véhicules de transport terrestre en trafic international ;
- b) Les bénéfices provenant de l'affrètement ou de la location coque nue de véhicules de transport terrestre, de navires ou d'aéronefs ;
- c) les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs (en ce compris les remorques et l'équipement y relatif utilisés pour le transport des conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ;
- d) l'intérêt sur les montants générés directement par l'exploitation de navires, d'aéronefs et de véhicules de transport terrestre en trafic international ;

lorsque cette location, cette utilisation ou cet intérêt, que ce soit dans les termes du paragraphe b), c) ou d), est accessoire à l'exploitation de navires, d'aéronefs ou de véhicules de transport terrestre en trafic international ; 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à une flotte, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à une flotte, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9. Entreprises associées

1. Là où :

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État (et impose en conséquence) des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un État contractant à une personne résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente, et selon la législation de cet État. Mais si le ou la bénéficiaire effectif(ve) des dividendes est une personne résident(e) de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est résidente.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le ou la bénéficiaire effectif(ve) des dividendes, étant une personne résidente d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement permanent qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est résidente d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne résidente de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement permanent ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni soumettre les bénéfices non distribués de la société à un impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11. Intérêts

1. Les intérêts générés dans un État contractant et payés à une personne résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant dans lequel ils sont générés et selon la législation de cet État. Mais si le ou la bénéficiaire effectif(ve) des intérêts est une personne résident(e) de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 4 % du montant brut des intérêts provenant d'une vente à crédit versés par l'acheteur ou l'acheteuse de la machine et de l'équipement au ou à la bénéficiaire effectif(ve) qui est le vendeur ou la vendeuse de la machine et de l'équipement ;

b) 12 % du montant brut des intérêts générés par :

i) des prêts accordés par les banques et les compagnies d'assurance ;

ii) des obligations et des titres qui sont régulièrement et substantiellement négociés sur un marché de valeurs mobilières reconnu ;

c) 15 % du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

3. Le terme « intérêts », tel qu'il est utilisé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, ainsi que tous autres revenus que la législation fiscale de l'État d'où ils proviennent assimile aux revenus des sommes prêtées. Le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le ou la bénéficiaire effectif(ve) des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement a) à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur ou la débitrice est une personne résidente de cet État. Toutefois, lorsque la personne débitrice des intérêts, qu'elle soit ou non résidente d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État dans lequel l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations particulières entre la personne débitrice et le ou la bénéficiaire effectif(ve) ou entre l'une et l'autre et toute tierce personne, le montant des intérêts excède celui dont seraient convenus la personne débitrice et le ou la bénéficiaire effectif(ve) en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'objectif principal ou l'un des objectifs de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés est de tirer parti du présent article au moyen de cette création ou cession.

Article 12. Redevances

1. Les redevances générées dans un État contractant et payés à une personne résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant dans lequel elles sont générées et selon la législation de cet État. Mais si le ou la bénéficiaire effectif(ve) des redevances est une personne résident(e) de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

3. Le terme « redevances », tel qu'il est utilisé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage de nouvelles, d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les programmes d'ordinateur), de films cinématographiques ou de films, bandes et autres moyens de reproduction de l'image ou du son, de brevets, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'autres biens incorporels, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique, ainsi que les honoraires de services techniques.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le ou la bénéficiaire effectif(ve) des redevances, résident(e) d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou la propriété à l'origine de ces redevances se rattache

effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.

5. Des revenus sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur ou la débitrice est une personne résidente de cet État. Toutefois, lorsque la personne débitrice des redevances, qu'elle soit ou non résidente d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne débitrice et le ou la bénéficiaire effectif(ve) ou entre l'une et l'autre et une autre personne, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède le montant dont seraient convenus la personne débitrice et le ou la bénéficiaire effectif(ve) en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13. Gains en capital

1. Les gains qu'une personne résidente d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de la cession de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement permanent dont une entreprise d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne résidente d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de la cession de cet établissement permanent (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite en trafic international des navires, aéronefs ou véhicules terrestres, tire de l'aliénation de ces navires, aéronefs ou véhicules terrestres, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains qu'une personne résidente d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres participations comparables sont imposables dans l'autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, ces actions ou participations comparables ont tiré plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet autre État contractant.

5. Les gains, autres que ceux auxquels s'applique le paragraphe 4, qu'une personne résidente d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société, ou de participations comparables, telles que des participations dans une société de personnes ou une fiducie, qui est résidente de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État si le ou la cédant(e) a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant cette aliénation, au moins 20 pour cent du capital de cette société ou entité. Toutefois, si cette participation au capital de l'entreprise est inférieure à 20 %, l'impôt ainsi perçu ne peut excéder 16 % du gain.

6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents sont imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent selon la législation de cet État.

Article 14. Professions indépendantes

1. Le revenu qu'une personne physique résidente d'un État contractant tire de toute profession ou autre activité de caractère indépendant ne peut être imposé que dans cet État, sauf :

a) si elle dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État ;

b) si son séjour dans l'autre État contractant est d'une durée ou de périodes atteignant ou dépassant au total 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l'année civile concernée ; dans ce cas, seule la partie des revenus qui provient de ses activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

2. Le terme « services professionnels » comprend notamment les activités indépendantes scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocat(e)s, ingénieur(e)s, architectes, dentistes et comptables.

Article 15. Services personnels dépendants

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne résidente d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne résidente d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

a) la personne bénéficiaire est présente dans l'autre État pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l'année civile concernée ;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou une employeuse ou pour le compte d'un employeur ou d'une employeuse qui n'est pas une personne résidente de l'autre État ;

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur ou l'employeuse a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'une personne résidente d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule terrestre exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant, autres que les rémunérations reçues par une personne résidente de l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État.

Article 16. Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'une personne résidente d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est résidente de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Article 17. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'une personne résidente d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle (artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision), musicien ou musicienne, sportif ou sportive, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un ou une artiste du spectacle, un sportif ou une sportive exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou à la sportive lui ou elle-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste, du sportif ou de la sportive sont exercées.

Article 18. Pensions

1. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à une personne résidente de l'autre État contractant sont imposables dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut de la pension.

2. Les pensions alimentaires et autres, payées à une personne résidente d'un des États contractants, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, les pensions alimentaires et autres paiements d'entretien payés par une personne résidente d'un État contractant à une personne résidente de l'autre État contractant, dans la mesure où ils ne sont pas admis comme dégrèvement fiscal déductible pour le payeur ou la payeuse, ne sont imposables que dans le premier État.

Article 19. Fonction publique

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par un État contractant, une de ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision politique ou à cette collectivité locale ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est résidente de cet État et :

- i) possède la nationalité de cet État ;
- ii) n'est pas devenue résidente de cet État à seule fin d'exécuter les services en question.

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, honoraires, et autres rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité lucrative exercée par un État contractant ou par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant, une étudiante ou un ou une stagiaire qui est (ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant) une personne résidente de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21. Recettes diverses

1. Les éléments du revenu d'une personne résidente d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers, lorsque la personne bénéficiaire de ces revenus, résidente d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante par le truchement d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les éléments de revenu d'une personne résidente d'un État contractant qui ne sont pas visés dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l'autre État contractant sont également imposables dans cet autre État.

Impôt sur le capital

Article 22. Capital

1. Le capital constitué par des biens immobiliers que possèdent une personne résidente d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. Le capital constitué par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne résidente d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. Le capital d'une entreprise d'un État contractant qui exploite en trafic international des navires, des aéronefs ou des véhicules terrestres, représentée par ces navires, aéronefs ou véhicules terrestres et par les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules terrestres, n'est imposable que dans cet État.

4. Tous les autres éléments du capital d'une personne résidente d'un État contractant, situés dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans cet autre État.

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Article 23. Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. Lorsqu'une personne résidente d'Argentine perçoit des revenus ou possède un capital imposable au Chili conformément aux dispositions du présent Accord, l'Argentine autorise :

- a) la déduction de l'impôt sur le revenu de cette personne d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Chili ;
- b) en déduction de l'impôt sur le capital de cette personne, un montant égal à l'impôt sur le capital payé au Chili ;

Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou au capital imposables au Chili.

Lorsque, conformément à une disposition du présent Accord, les revenus qu'une personne résidente de l'Argentine reçoit ou le capital qu'elle possède sont exonérés d'impôt en Argentine, l'Argentine peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de cette personne, tenir compte des revenus ou du capital exonérés.

2. En ce qui concerne le Chili, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) Les personnes résidentes au Chili qui perçoivent des revenus ou possèdent un capital qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables en Argentine, peuvent imputer l'impôt ainsi payé sur tout impôt chilien exigible à l'égard des mêmes revenus ou du même capital, sous réserve des dispositions applicables de la législation chilienne. Le présent paragraphe s'applique à tous les revenus visés par le présent Accord.

b) Lorsque, conformément à une disposition du présent Accord, les revenus qu'une personne résidente du Chili reçoit ou le capital qu'elle possède sont exonérés d'impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de cette personne, tenir compte des revenus ou du capital exonérés.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, en ce qui concerne les gains visés au paragraphe 5 de l'article 13 qu'une personne résidente d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou autres droits de participation, autres que ceux visés au paragraphe 4 de cet article, qui représentent indirectement une part du capital d'une société qui est résidente de l'autre État contractant, le premier État n'est pas tenu par le présent Accord de prévoir les méthodes d'élimination de la double imposition établies dans le présent article.

Article 24. Droit à prestations

1. Sauf disposition contraire du présent article, une personne résidente d'un État contractant ne peut bénéficier d'un avantage qui lui serait autrement accordé par le présent Accord (autre qu'un avantage en vertu du paragraphe 3 de l'article 4, du paragraphe 2 de l'article 9 ou de l'article 26) que si cette personne est une « personne qualifiée », telle que définie au paragraphe 2, au moment où cet avantage lui serait accordé.

2. Une personne résidente d'un État contractant est une personne qualifiée au moment où les avantages prévus par le présent Accord s'appliquent si cette personne est :

- a) un individu ;
- b) un État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou une entité entièrement détenue par cet État, cette subdivision politique ou cette collectivité locale ;

c) une société ou une autre entité, si tout au long de la période imposable qui inclut cette période :

i) sa principale catégorie d'actions (et toute autre catégorie disproportionnée d'actions) est régulièrement négociée sur une ou plusieurs bourses de valeurs reconnues ; et soit :

(A) sa principale catégorie d'actions est principalement négociée sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus situés dans l'État contractant dont la société ou l'entité est résidente ;

(B) l'organe de direction et de contrôle principal de la société ou de l'entité se trouve dans l'État contractant dont elle est résidente ;

ii) au moins 50 % du total des voix et de la valeur des actions (et au moins 50 % de toute catégorie disproportionnée d'actions) de la société ou de l'entité sont détenues directement ou indirectement par cinq sociétés ou entités au plus ayant droit aux avantages prévus à l'alinéa i) ci-dessus du présent Accord, à condition que, dans le cas d'une propriété indirecte, chaque propriétaire intermédiaire soit une personne résidente de l'un ou l'autre État contractant ;

d) une personne autre qu'un individu, qui

i) est une institution sans but lucratif, établie et maintenue dans cet État exclusivement à des fins religieuses, charitables, éducatives ou scientifiques ;

ii) est constituée et exploitée uniquement en tant que fonds de pension ou fonds similaire, à condition que plus de 50 % des intérêts bénéficiaires de cette personne soient détenus par des personnes physiques résidentes de l'un ou l'autre des États contractants ;

iii) est constituée et exploitée en tant qu'instrument de placement pour les personnes visées au sous-paragraphe (ii) ci-dessus, à condition que la quasi-totalité des revenus de la personne proviennent d'investissements réalisés pour ces personnes ;

e) une personne autre qu'un individu si :

i) à ce moment et pendant au moins la moitié des jours de la période imposable qui comprend ce moment, les personnes qui sont résidentes de cet État contractant et qui ont droit aux avantages du présent Accord en vertu des alinéas a), b) ou d) ou de l'alinéa i) de l'alinéa c) du présent paragraphe, possèdent, directement ou indirectement, des actions représentant au moins 50 % du total des voix et de la valeur (et au moins 50 % de toute catégorie disproportionnée d'actions) des actions de la personne, à condition que, dans le cas d'une propriété indirecte, chaque propriétaire intermédiaire soit une personne résidente de cet État contractant ;

ii) moins de 50 % des revenus bruts de la personne, déterminés dans l'État contractant dont elle est résidente pour la période imposable qui comprend ce moment, sont payés ou acquis, directement ou indirectement, sous forme de paiements déductibles aux fins des impôts visés par le présent Accord dans l'État contractant de résidence de la personne (à l'exclusion des paiements sans lien de dépendance faits dans le cours normal des affaires pour des services ou des biens corporels), à des personnes qui ne sont pas des résidentes de l'un ou l'autre des États contractants ayant droit aux avantages du présent Accord en vertu des alinéas a), b) ou d) ou du sous-alinéa i) de l'alinéa c) du présent paragraphe ;

3. a) une personne résidente d'un État contractant a droit aux avantages en vertu du présent Accord à l'égard d'un élément de revenu provenant de l'autre État contractant, que cette personne soit ou non qualifiée, si elle exerce une activité industrielle ou commerciale dans le premier État contractant (autre que l'activité consistant à faire ou à gérer des placements pour son propre compte, à moins que ces activités ne soient des activités bancaires, d'assurance ou de valeurs mobilières exercées par une banque, une entreprise d'assurance ou un courtier ou une courtière en

valeurs mobilières agréé) et si le revenu provenant de l'autre État contractant émane de cette activité ou y est accessoire.

b) si une personne résidente d'un État contractant tire des revenus d'une activité industrielle ou commerciale qu'elle exerce dans l'autre État contractant, ou si elle tire des revenus provenant d'une entreprise liée dans l'autre État contractant, les conditions décrites à l'alinéa a) ne sont considérées comme satisfaites à l'égard de ces revenus que si l'activité industrielle ou commerciale exercée par cette personne dans le premier État contractant et à laquelle les revenus se rattachent est substantielle par rapport à l'activité industrielle ou commerciale identique ou complémentaire exercée par cette personne ou par cette entreprise liée dans l'autre État contractant. La question de savoir si une activité commerciale est substantielle aux fins du présent paragraphe est déterminée en fonction des faits et des circonstances.

c) Pour l'application du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes rattachées à l'égard d'une personne résidente d'un État contractant sont considérées comme étant exercées par cette personne. Une personne est une « personne liée » si elle possède au moins 50 % des intérêts bénéficiaires de l'autre personne (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 % du total des voix et de la valeur des actions de la société ou de ses dividendes), ou si une autre personne possède au moins 50 % des intérêts bénéficiaires (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 % du total des voix et de la valeur des actions de la société ou de ses dividendes) de chaque personne. En tout état de cause, une personne est liée à une autre si, tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents, l'une d'elles exerce un contrôle sur l'autre ou si les deux sont sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes.

4. Si une personne résidente d'un État contractant n'a pas droit aux avantages du présent Accord en vertu des paragraphes précédents du présent article, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé ces avantages peut néanmoins accorder les avantages du présent Accord à l'égard d'un élément spécifique de revenu ou de capital, si cette personne démontre à la satisfaction de cette autorité compétente, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que ni son établissement, son acquisition ou son maintien, ni la conduite de ses opérations, n'ont eu pour but principal d'obtenir des avantages en vertu du présent Accord. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle une demande a été présentée, en vertu du présent paragraphe, par une personne résidente de l'autre État, consulte l'autorité compétente de cet autre État contractant avant de faire droit ou de rejeter la demande.

5. Aux fins de l'application des paragraphes précédents du présent article :

a) Le terme « bourse de valeurs reconnue » signifie :

i) Au Chili, les bourses « Bolsa de Comercio de Santiago », « Bolsa Electrónica de Chile » et « Bolsa de Corredores », ainsi que toute autre bourse reconnue par la surintendance des valeurs mobilières et des assurances conformément à la législation nationale ; en Argentine, les marchés boursiers qui fonctionnent sous le contrôle de la Commission nationale des valeurs mobilières ;

ii) toute autre bourse de valeurs convenue par les autorités compétentes des États contractants.

b) Le terme « principale catégorie d'actions » désigne les actions ordinaires ou courantes de la société, à condition que cette catégorie d'actions représente la majorité de l'ensemble des voix et de la valeur de la société. Si aucune catégorie d'actions ordinaires ou courantes ne représente la majorité de l'ensemble des votes et de la valeur de la société, la « principale catégorie d'actions » est celle qui, dans l'ensemble, représente la majorité de l'ensemble des votes et de la valeur. Dans le cas d'une société participant à un dispositif de société à double cotation, la principale catégorie

d'actions est déterminée après exclusion des actions à droit de vote spécial émises pour la mise en place de ce dispositif.

c) Le terme « catégorie d'actions disproportionnée » désigne toute catégorie d'actions d'une société résidente d'un des États contractants qui donne droit à l'actionnaire à une participation disproportionnée, par le biais de dividendes, de paiements de rachat ou autrement, aux revenus générés dans l'autre État contractant par des actifs ou des activités particuliers de la société.

d) Le terme « principal lieu de gestion et de contrôle » d'une société est situé dans l'État contractant dont elle est résidente uniquement si les dirigeants, dirigeantes et les cadres supérieur(e)s de la société exercent la responsabilité quotidienne d'une plus grande partie des décisions stratégiques, financières et opérationnelles de la société (y compris les filiales directes et indirectes), et si le personnel de ces personnes exerce une plus grande partie des activités quotidiennes nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre de ces décisions, dans cet État contractant que dans tout autre État.

e) Le terme « accord de société à double cotation » désigne un accord en vertu duquel deux sociétés cotées en bourse, bien qu'elles conservent leur personnalité juridique, leurs actions et leurs registres séparés, harmonisent leur gestion stratégique et les intérêts économiques de leurs actionnaires respectif(ve)s par :

i) la désignation de conseils d'administration communs (ou presque identiques), sauf si la réglementation applicable ne le permet pas ;

ii) la gestion unifiée des opérations des deux entreprises ;

iii) des distributions égales aux actionnaires suivant un ratio d'égalisation applicable aux deux sociétés, permettant la possibilité de liquidation de l'une ou des deux sociétés ;

iv) le vote effectif par les actionnaires des deux sociétés en tant qu'entité décisionnelle unique sur des questions substantielles affectant leurs intérêts combinés, et le collatéral croisé, ou un soutien financier similaire, pour des obligations et des opérations substantielles, sauf lorsque ce collatéral ou ce soutien financier sont empêchés par des exigences réglementaires ;

f) en ce qui concerne les autres types de sociétés et d'entités, le terme « actions » comprend les droits, intérêts ou participations qui sont comparables à des actions.

6. Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, un avantage au titre du présent Accord n'est pas accordé à l'égard d'un élément de revenu ou de capital s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l'obtention de cet avantage était l'un des principaux objectifs d'un arrangement ou d'une transaction qui a donné lieu directement ou indirectement à cet avantage, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord.

7. Considérant que les principaux objectifs du présent Accord sont d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale, les États contractants conviennent que, dans le cas où les dispositions de l'Accord sont utilisées de manière à accorder des avantages qui n'y sont pas envisagés ou voulus, les autorités compétentes des États contractants doivent, conformément à la procédure amiable prévue à l'article 26, recommander des modifications spécifiques à l'Accord. Les États contractants conviennent également que toute recommandation de ce type sera examinée et discutée rapidement en vue d'apporter les modifications nécessaires au présent Accord.

8. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant perçoit des revenus de l'autre État contractant et que le premier État considère ces revenus comme attribuables à un établissement

stable de l'entreprise situé dans une juridiction tierce, les avantages fiscaux qui auraient autrement été applicables en vertu d'autres dispositions de l'Accord ne s'appliquent pas à cet élément de revenu si le total de l'impôt effectivement payé sur cet élément de revenu dans le premier État contractant et dans la juridiction tierce est inférieur à 60 % de l'impôt qui serait perçu si l'élément de revenu était payé ou reçu dans cet État par l'entreprise et n'était pas attribuable à l'établissement stable situé dans la juridiction tierce. Les revenus auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe restent imposables selon la législation interne de l'autre État, nonobstant toute autre disposition de la Convention.

9. Nonobstant les dispositions du présent Accord, un État contractant conserve le droit de grever, conformément à sa législation interne, tout élément de revenu provenant de cet État et payé par une personne résidente de l'autre État contractant (à moins que cette personne ne soit l'une des personnes visées au paragraphe 2, alinéas b) et d), sous-sections i) et ii) du présent article, et ne remplisse les conditions requises pour avoir droit aux avantages de l'Accord), lorsque cet élément de revenu n'est pas effectivement imposable dans l'autre État contractant. Les États contractants identifient, par un échange de notes, les lois d'allègement fiscal auxquelles cette règle s'applique. En outre, ils s'engagent à s'informer mutuellement de toute loi future qui produirait le même effet.

Dispositions particulières

Article 25. Non-discrimination

1. Les personnes ressortissantes d'un État contractant ne sont soumises dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes ressortissantes de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents et résidentes.

3. À moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres montants payés par une entreprise d'un État contractant à une personne résidente de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne résidente du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes résidentes de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Dans le présent article, le terme « impôt » s'entend des impôts visés par le présent Accord.

Article 26. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est résidente ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer entre elles directement en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.

Article 27. Échange d'informations

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange d'informations n'est pas limité par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces informations à aucune autre fin. Elles peuvent divulguer ces informations dans le cadre de procédures judiciaires publiques ou dans les décisions judiciaires. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si la législation des deux États l'autorise et si l'autorité compétente de l'État qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, quand bien même il n'aurait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L'obligation énoncée dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 ; cependant, en aucun cas ces limitations ne doivent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseignements au seul motif qu'il n'a pas d'intérêt national à les obtenir.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Article 28. Assistance en matière de recouvrement des impôts

Les États contractants s'engagent à se prêter mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent, d'un commun accord, régler le mode d'application du présent article conformément à leurs lois respectives.

Article 29. Membres des missions diplomatiques et de postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 30. Dispositions diverses

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article XXII (Concertation) de l'Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu de l'article 24 ou, en l'absence d'un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

2. Aucune disposition du présent Accord n'affecte l'application des dispositions existantes de la législation chilienne DL 600 (statut de l'investissement étranger) telles qu'elles sont en vigueur au moment de sa signature et telles qu'elles peuvent être modifiées de temps à autre sans en changer le principe général.

3. a) Aucune disposition du présent Accord n'affecte l'imposition au Chili d'une personne résidente de l'Argentine à l'égard des bénéfices attribuables à un établissement stable situé en Argentine, tant au titre de l'impôt de première catégorie que de l'impôt additionnel, mais seulement dans la mesure où l'impôt de première catégorie est déductible de l'impôt additionnel.

b) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, lorsqu'une société qui est résidente du Chili a un établissement stable en Argentine, les bénéfices assujettis à l'impôt en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 peuvent faire l'objet d'une retenue supplémentaire en Argentine au moment du paiement des bénéfices, conformément à sa législation fiscale, mais la retenue ne doit pas dépasser 10 % du montant de ces bénéfices, après déduction des impôts argentins sur le revenu.

Dispositions finales

Article 31. Entrée en vigueur

1. Les États contractants se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification.

2. Les dispositions du présent Accord s'appliquent :

a) En Argentine :

i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les montants payés à partir du 1^{er} janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Accord.

ii) À l'égard des autres impôts sur le revenu et la fortune pour les années fiscales commençant à partir du 1^{er} janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Accord.

b) Au Chili :

i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu obtenus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, le ou après le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du présent Accord.

ii) L'échange d'informations visé au paragraphe 5 de l'article 27 de l'Accord n'est disponible que pour les opérations bancaires effectuées à partir du 1^{er} janvier 2010, dans la mesure où ces informations sont couvertes par l'article 1 du DFL n° 707 et l'article 154 du DFL n° 3.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, l'article 8 s'applique aux années fiscales ou aux exercices fiscaux commençant à partir du 30 juin 2012.

Article 32. Dénonciation

1. Le présent Accord reste en vigueur indéfiniment, mais chacun des États contractants peut, au plus tard le 30 juin de chaque année civile suivant l'année d'entrée en vigueur de l'accord, donner à l'autre État contractant un avis écrit de dénonciation par la voie diplomatique.

2. Dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets :

a) En Argentine :

i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les montants payés à partir du 1^{er} janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle l'avis a été donné ;

ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour les années fiscales commençant le ou après le 1^{er} janvier de l'année civile suivant celle où l'avis est donné.

b) Au Chili :

En ce qui concerne les impôts sur le revenu obtenus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, le ou après le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du présent Accord.

3. En ce qui concerne les situations qui ne sont pas couvertes par les alinéas a) ou b) du paragraphe 2 du présent article, le présent accord cesse de produire ses effets le premier jour de janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le préavis de dénonciation est donné. Les demandes d'information reçues avant la date de notification de la résiliation sont soumises aux dispositions du présent Accord. Les États contractants restent liés par les obligations de confidentialité énoncées à l'article 27 du présent Accord en ce qui concerne toute information obtenue dans le cadre du présent Accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Santiago le 15 mai 2015, en deux exemplaires originaux en espagnol.

Pour la République argentine :

ANÍBAL FERNÁNDEZ

Chef du Cabinet des ministres

Pour la République du Chili

RODRIGO VALDÉS

Ministre des finances

PROTOCOLE

Au moment de la signature de l'Accord entre la République argentine et la République du Chili tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord.

1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4 :

Si le Chili établit un impôt sur le capital après la date de signature du présent Accord, cet impôt y sera inclus.

2. En référence à l'article 3, paragraphe 1, alinéas g) i) :

Il est entendu que le Ministère des affaires économiques et des finances publiques (Ministère des finances) agit par l'intermédiaire du Ministre des affaires économiques et des finances publiques, ou du Secrétaire des finances, ou de leurs représentants et représentantes autorisé(e)s.

3. En référence à l'article 4 :

a) Le terme « personne résidente d'un État contractant » comprend :

i) une association à but non lucratif établie et maintenue dans un État contractant uniquement à des fins religieuses, charitables, éducatives, scientifiques ou à d'autres fins similaires à convenir entre les autorités compétentes ;

ii) un fonds de pension établi et réglementé conformément au système de sécurité sociale d'un État contractant, principalement au profit des personnes résidentes de cet État, bien que tout ou partie de ses revenus ou bénéfices puissent être exonérés d'impôts dans cet État conformément à sa législation interne.

Au sens du présent Accord, un fonds de pension établi et réglementé conformément au système de sécurité sociale d'un État contractant principalement au profit des personnes résidentes de cet État est considéré comme un bénéficiaire effectif de tout revenu qu'il pourrait obtenir.

b) En ce qui concerne les comptes ou les fonds d'investissement (véhicules de placement collectif) établis dans un État contractant qui ne répondent pas à la définition donnée au paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord et qui ne sont pas couverts par l'alinéa a) du présent paragraphe, les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme restreignant l'imposition dans l'un ou l'autre État contractant, conformément à son droit interne, des transferts de fonds effectués par ces comptes ou fonds d'investissement ou des revenus provenant du recouvrement ou du transfert des frais imputés aux participants à ces comptes ou fonds d'investissement.

4. En référence à l'article 5, paragraphe 3, alinéa b) :

Il est entendu que les activités menées dans un État doivent être poursuivies par le biais d'employé(e)s ou d'autres personnes présentes dans cet État.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7 :

Il est entendu que les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant sont considérés comme imputables à l'établissement stable situé dans l'autre État contractant si la société vend des biens ou des marchandises ou exerce des activités commerciales dans cet autre État qui sont identiques ou substantiellement similaires aux ventes ou aux activités commerciales exercées par l'intermédiaire de cet établissement stable, à moins que la société ne démontre qu'elles ont été

effectuées de cette façon pour des raisons autres que celle de tirer un avantage du présent Accord ou que la société a effectué ces ventes ou exercé ces activités sans que l'établissement stable y ait joué un rôle actif.

6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 7 :

Il est entendu que, dans chaque État contractant, les bénéfices que l'établissement stable aurait réalisés s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne, sont imputés à cet établissement stable.

7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 :

Il est entendu que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 ne s'appliquent qu'aux dépenses qui pourraient être attribuées à l'établissement stable et que, par conséquent, l'établissement stable peut déduire, conformément aux dispositions de la législation fiscale de l'État contractant dans lequel l'établissement stable est situé.

8. En référence aux articles 7 et 21 :

Nonobstant les dispositions de l'article 7, les revenus des activités de pêche relèvent de l'article 21 de l'Accord.

9. En référence à l'article 8 :

a) Il est entendu que les services de transport effectués pendant l'exploitation minière comprennent le chargement et sont assujettis aux taxes prévues à l'article 8 de l'Accord.

b) Tout accord antérieur entre les Parties concernant la double imposition cesse de produire ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

10. En référence à l'article 9 :

Il est entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à ajuster le montant des bénéfices soumis à l'impôt dans cet État, à moins qu'il ne soit convenu que les mesures prises par l'autre État, conformément au paragraphe 1 de l'article 9, sont justifiées tant en elles-mêmes qu'en ce qui concerne le montant de l'ajustement des bénéfices par l'autre État.

11. En référence à l'article 10 :

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 ne limitent pas l'application de l'impôt supplémentaire payable au Chili, à condition que l'impôt de première catégorie soit déductible de l'impôt supplémentaire.

Lorsqu'une société résidente d'Argentine verse des dividendes ou distribue des bénéfices qui dépassent l'excédent cumulé imposable à la fin de l'exercice fiscal précédant immédiatement la date du versement ou de la distribution, déterminé conformément aux dispositions de la loi argentine sur l'impôt sur le revenu, la limitation prévue au paragraphe 2 de l'article 10 ne s'applique pas au montant de la retenue correspondante par l'application des dispositions de la loi susmentionnée. À cet égard, la retenue est considérée comme ayant le même effet que l'imposition de la société au titre des bénéfices utilisés pour payer les dividendes.

12. En référence à l'article 11 :

Si un accord entre le Chili et un État tiers prévoit un taux inférieur à celui qui est prévu à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 11, ce taux inférieur s'appliquera automatiquement aux intérêts provenant du Chili dont une personne résidente de l'Argentine est la bénéficiaire et aux

intérêts provenant de l'Argentine dont une personne résidente du Chili est la bénéficiaire, dans les mêmes conditions que si ce taux réduit était précisé dans ce paragraphe et à compter de la date à laquelle le taux inférieur commence à s'appliquer conformément à cet autre accord. L'autorité compétente du Chili informe rapidement l'autorité compétente de l'Argentine que les conditions ont été remplies pour la mise en œuvre du présent paragraphe. Ce taux inférieur ne doit pas être inférieur à 12 %.

13. En référence à l'article 12 :

a) Dans le cas des redevances prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 12, la limitation de l'imposition à la source s'applique dans la mesure où les contrats respectifs de transfert de technologie sont dûment enregistrés conformément aux dispositions des lois en vigueur en Argentine au moment de la signature de l'Accord. Dans le cas où, par l'application des lois argentines susmentionnées, l'enregistrement du contrat de transfert de technologie n'est pas finalisé et que cette situation entraîne l'inapplicabilité des limitations de l'imposition à la source prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 12 susmentionné, à condition qu'une solution satisfaisante n'ait pu être trouvée unilatéralement, la personne concernée peut présenter son cas à l'autorité compétente du Chili pour tenter de résoudre la question par la procédure prévue à l'article 26.

b) Il est entendu que les paiements pour l'utilisation ou le droit d'utilisation d'un logiciel relèvent du paragraphe 2, alinéa b), de l'article 12. De même, il est entendu que les paiements effectués pour acquérir une partie du droit d'auteur d'un logiciel (sans que l'auteur ou le cédant ne transfère ses droits de propriété intellectuelle) et les paiements effectués en échange du droit d'utiliser les droits (y compris partiellement) sur le logiciel, constituent une redevance si, en l'absence d'une licence achetée, il y aurait une violation des lois sur le droit d'auteur. Toutefois, si les droits acquis à l'égard d'un programme informatique standardisé (logiciel sous emballage) sont limités à ceux qui sont nécessaires pour permettre à l'utilisateur ou à l'utilisatrice d'exploiter le programme, les paiements reçus au titre du transfert de ces droits sont traités comme des bénéfices commerciaux, auxquels l'article 7 s'applique.

c) Par assistance technique, on entend la fourniture de services indépendants impliquant l'application, par le prestataire de services, de connaissances, de compétences ou d'expériences non brevetables, à un client ou à une cliente.

d) La limitation de l'assujettissement à l'impôt dans l'État d'où proviennent les redevances, établie au paragraphe 2, alinéa b), de l'article 12, ne s'applique que lorsque ces redevances sont versées à l'auteur(e) en personne ou à ses héritiers, héritières et ayants droit. Dans le cas où le ou la bénéficiaire n'est pas l'auteur(e) lui ou elle-même ou ses ayants droit, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa c), de l'article 12 est applicable.

e) Il est entendu que les revenus qu'une personne physique qui est résidente d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant qui constituent une « assistance technique » au sens de l'alinéa c) ci-dessus, relèvent des dispositions de l'article 12 de l'Accord et non de l'article 14, sauf lorsque les circonstances prévues au paragraphe 4 de l'article 12 ou à l'alinéa b) de l'article 14 se produisent, auquel cas ce dernier article s'applique.

14. En référence à l'article 13 :

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 13, en cas de transferts de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 13, portant sur des biens soumis à immatriculation (entendus comme les aéronefs, les véhicules à moteur et les navires non couverts

par le paragraphe 3 de l'article 13), les gains sont imposables dans l'un ou l'autre des États contractants conformément à leur législation interne respective.

b) Les simples transferts d'actifs effectués par une personne résidente d'un État contractant dans le cadre de la réorganisation d'une entreprise n'ont pas d'effets fiscaux, conformément au droit interne de chacun des États contractants.

15. En référence à l'article 17 :

Il est entendu que les revenus visés au paragraphe 1 de l'article 17 comprennent les revenus provenant de toutes les activités personnelles exercées par une personne résidente d'un État contractant dans l'autre État contractant et liées à la réputation ou au renom de cette personne en tant qu'artiste, sportif ou sportive.

16. En référence aux articles 18 et 19 :

Le terme « pensions » s'entend conformément à la législation interne de chaque Partie et, dans le cas de l'Argentine, couvre notamment les retraites.

17. En référence à l'article 22 :

Si, à une date postérieure à la signature de l'Accord et du présent Protocole, l'Argentine signe avec un État tiers un accord par lequel elle accepte d'exonérer d'impôt ou de réduire le taux de l'impôt visé à l'article 22, elle en informe l'autorité compétente du Chili et les États contractants s'engagent à entamer des négociations en vue de modifier le présent Accord.

18. En référence à l'article 24 :

L'expression « lorsque ces revenus ne sont pas effectivement soumis à l'impôt » contenue dans le paragraphe 9 de l'article 24 relatif à la limitation des prestations couvre à la fois les revenus totalement exonérés d'impôt sur le revenu et les revenus soumis à une imposition substantiellement inférieure à celle qui serait applicable selon les règles générales de l'État de résidence du ou de la bénéficiaire des revenus. En particulier, il est entendu que les revenus soumis à un impôt substantiellement inférieur à celui qui est généralement applicable comprennent les revenus qui, en raison de l'application de dispositions spéciales établissant des exonérations ou des réductions d'impôt, d'une réduction de la base d'imposition ou du taux d'imposition, ou d'un autre avantage fiscal, sont soumis à des impôts s'élevant à moins de 60 % du montant qui serait applicable en l'absence de telles règles.

19. En référence à l'article 25 :

1) Il est entendu que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 25 s'appliquent, dans le cas de l'Argentine, à condition que les conditions d'enregistrement visées au point 13 a) du présent Protocole soient remplies.

2) Il est entendu que les dispositions de la législation interne d'un État contractant qui refusent ou annulent toute exonération ou tout allègement total ou partiel que la législation interne de cet État accorde ou a accordé à l'égard des impôts visés par l'Accord, s'il y a transfert de revenus au trésor de l'autre État contractant, ne violent pas l'article 25 de l'Accord.

20. En référence à l'article 26 :

si l'Argentine modifie sa politique en ce qui concerne l'arbitrage en tant que procédure mutuellement acceptable pour le règlement des différends, les autorités compétentes se consultent afin d'envisager la négociation d'un accord visant à modifier le présent Accord. En outre, les autorités compétentes s'efforcent de mettre en œuvre aussi efficacement que possible la procédure convenue d'un commun accord prévue à l'article 26.

21. Dispositions particulières

Considérant que les principaux objectifs du présent Accord sont d'éliminer la double imposition internationale et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, afin d'éliminer leurs effets négatifs sur l'échange de biens et de services et la libre circulation des capitaux, des technologies et des personnes physiques, si la mise en œuvre de l'Accord ne conduit pas à la promotion de leurs relations économiques, les États contractants conviennent que, à tout moment après l'expiration de la période de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les autorités compétentes peuvent se réunir pour examiner rapidement la nécessité d'apporter d'éventuelles modifications à l'Accord, en tenant compte de l'expérience acquise dans sa mise en œuvre au cours des années précédentes et des modifications apportées à leur législation fiscale interne.

Pour la République argentine :

ANÍBAL FERNÁNDEZ

Chef de cabinet

Pour la République du Chili :

RODRIGO VALDÉS

Ministre des finances